

gunas organizaciones privadas conceden becas de estudios, pero la Misión Visitadora observó que en la mayoría de los casos, los estudiantes tienen que sufragarse los gastos de sus estudios; la Administración ha concedido una beca de estudios en el extranjero y se encarga de los gastos de transporte de todos los estudiantes. Un ciudadano distinguido del Territorio recibió de las Naciones Unidas una beca de perfeccionamiento de estudios en materia de administración pública.

En su décimo período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria recomendó que la Autoridad Administradora estudiara la posibilidad de liberalizar la adjudicación de becas de estudios para permitir a los estudiantes autóctonos realizar estudios en el exterior, en especial estudios de derecho y de cuestiones administrativas y comerciales. La Autoridad Administradora ha hecho saber que se da perfecta cuenta de la necesidad de aumentar el número de becas de estudios y de otras formas de asistencia, y que no descuidaba esfuerzo alguno para lograrlo por medio de contribuciones públicas y privadas. La Misión comprobó que una de las principales dificultades que había que vencer era la de que los alumnos que habían terminado sus estudios en la Escuela Central de las Islas del Pacífico no podían por lo general obtener becas de estudios en el extranjero, en especial dentro del Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, porque la enseñanza impartida en esa escuela no alcanzaba todavía el nivel correspondiente a las escuelas secundarias. Expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora y las organizaciones que conceden becas de estudios harán todo lo necesario para brindar a los mejores alumnos de esa escuela la posibilidad de alcanzar el nivel requerido. La Autoridad Administradora informó que la experiencia había demostrado que lo mejor sería que los alumnos pudiesen seguir durante un año los cursos de las escuelas secundarias, en Hawaii, en otra parte, antes de entrar a la universidad.

Observaciones de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria hechas a título personal únicamente

El representante de Bélgica señaló que la Misión Visitadora había llegado a la conclusión de que era necesario aumentar el número de establecimientos de enseñanza secundaria. Actualmente, no todos los niños que lo merecen o que lo desean tienen la posibilidad de beneficiarse de dicha enseñanza. La Escuela Central de las Islas del Pacífico se contenta al presente con dar una instrucción general, mientras que anteriormente había estado orientada más concretamente hacia la formación de maestros; los estudiantes que desean dedicarse a la enseñanza reciben instrucción general en esa escuela y completan su formación mediante una especie de aprendizaje. A su juicio, como es probable que el Territorio necesite alrededor de 500 maestros, convendría crear una escuela normal, distinta de la Escuela Central de las Islas del Pacífico, que se dedicase a la formación de personal docente.

El representante de El Salvador felicitó a la Autoridad Administradora por los esfuerzos realizados en el campo de la enseñanza y señaló con satisfacción que la Administración había tenido debidamente en cuenta las observaciones de la UNESCO.

El representante de China declaró que su delegación había tomado nota con satisfacción del vasto estudio emprendido por la UNESCO sobre la situación de la enseñanza en el Territorio y que aprobaba todas las observaciones formuladas, sobre todo la su gestión relativa a la creación de un comité asesor que estaría encargado de coordinar las actividades en materia de instrucción de adultos y de educación fundamental. Además, el representante de China estimó que cabría felicitar a la Autoridad Administradora por las medidas que había adoptado para garantizar la difusión en el Territorio de informaciones sobre las Naciones Unidas, y en especial sobre el régimen internacional de administración fiduciaria.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señaló que a los municipios correspondía toda la carga de la instrucción primaria pública. No obstante, muchos de ellos no disponían ni siquiera de los fondos necesarios para pagar los salarios muy modestos de los maestros indígenas. La Administración ha reconocido igualmente que el número de maestros calificados era insuficiente y que en muchas escuelas elementales la duración de los estudios era apenas de dos o tres años, por falta de fondos adecuados y de maestros. La Autoridad Administradora no concedía ayuda alguna a los municipios para mejorar la enseñanza. La Misión Visitadora señaló la necesidad urgente de aumentar el número y de mejorar la calidad de los maestros indígenas, así como de aumentar el número de edificios destinados a la enseñanza. Por lo tanto, se desprende del informe de la Misión Visitadora y del informe anual de la Autoridad Administradora que todavía queda mucho por hacer y que deben adoptarse medidas urgentes para mejorar la situación. El representante de la URSS señaló a la atención de la Autoridad Administradora la necesidad de aumentar los fondos que los municipios destinan a la enseñanza.

El representante especial de la Autoridad Administradora señaló con satisfacción que los miembros del Consejo, la Misión Visitadora y la UNESCO habían aprobado, en términos generales, el programa revisado de enseñanza del Territorio.

DOCUMENTO S/3272

Informe del Consejo de Administración Fiduciaria al Consejo de Seguridad sobre el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, correspondiente al período comprendido entre el 22 de julio de 1953 y el 16 de julio de 1954

INDICE

	Página
Introducción	92
<i>Parte I. Actividades del Consejo de Administración Fiduciaria relativas al Territorio en fideicomiso</i>	
Examen del informe anual	92
Peticiones	92
<i>Parte II. Condiciones existentes en el Territorio en fideicomiso</i>	
I. Información general	
Reseña de las condiciones en el Territorio y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria	93
Observaciones de los miembros del Consejo, hechas a título personal únicamente	93
II. Progreso político	
Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo	96

	<i>Página</i>
Observaciones de los miembros del Consejo, hechas a título personal únicamente	99
III. Progreso económico	
Reseña de las condiciones en el Territorio y recomendaciones aprobadas por el Consejo	101
Observaciones de los miembros del Consejo, hechas a título personal únicamente	106
IV. Progreso social	
Reseña de las condiciones del Territorio y de las recomendaciones adoptadas por el Consejo	109
Observaciones de los miembros del Consejo, hechas a título personal únicamente	111
V. Progreso de la enseñanza	
Reseña de la situación del Territorio y recomendaciones adoptadas por el Consejo	112
Observaciones de los miembros del Consejo, hechas a título personal únicamente	114

INTRODUCCIÓN

De conformidad con el Artículo 83 de la Carta, con la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad en su 415a. sesión, celebrada el 7 de marzo de 1949, y con la resolución 46 (V) aprobada por el Consejo de Administración Fiduciaria el 24 de marzo de 1949, el Consejo de Administración Fiduciaria ha ejercido en nombre del Consejo de Seguridad las funciones asumidas por las Naciones Unidas en virtud del régimen internacional de administración fiduciaria relativas al progreso político, económico y social y al desarrollo de la enseñanza de los habitantes del Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, designado como zona estratégica.

Parte I

ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA RELATIVAS AL TERRITORIO EN FIDEICOMISO

Examen del informe anual

El informe del Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la administración del Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico correspondiente al período comprendido entre el 1º de julio de 1952 y el 30 de junio de 1955³⁸ fué comunicado a los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria el 18 de mayo de 1954 y fué inscrito en el programa del 14º período de sesiones.

El Sr. F. E. Midkiff, Alto Comisionado para el Territorio en fideicomiso, designado representante especial de la Autoridad Administradora, hizo su primera declaración en la 550a. sesión y respondió a las preguntas hechas por los miembros del Consejo de la 551a. a la 555a. sesiones.

El Consejo dedicó sus 554a., 556a. y 557a. sesiones a un debate general sobre la cuestión de las conclusiones y recomendaciones que debían formularse con relación al informe y a la situación del Territorio; encargó a un comité de redacción, integrado por los representantes de El Salvador, Francia, Nueva Zelan-

³⁸ Informe sobre la Administración del Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico correspondiente al período comprendido entre el 1º de julio de 1952 y el 30 de junio 1953, transmitido por los Estados Unidos de América a las Naciones Unidas, en cumplimiento del Artículo 88 de las Naciones Unidas (Office of Territories, United States Department of the Interior and Office of the Chief of Naval Operations, United States Department of the Navy, Washington, D.C.), transmitido al Consejo de Administración Fiduciaria por el Secretario General con la signatura T/1118.

dia y Siria, la preparación de un proyecto de informe del Consejo de Administración Fiduciaria al Consejo de Seguridad relativo a la situación del Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico.

El proyecto preparado por el comité de redacción (T/L.478 y Add.1 y T/L.518) fué examinado y aprobado con algunas modificaciones por el Consejo en su 562a. sesión y constituye la parte II del presente informe.

Peticiones

En su 14º período de sesiones, el Consejo tuvo ante sí tres peticiones relativas al Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico.

Dos de ellas se referían a los experimentos de armas termonucleares realizados por la Autoridad Administradora en las Islas Marshall. Una de estas peticiones (T/PET.10/28) fué presentada por la población de las Islas Marshall. Los peticionarios se quejaban de que un grupo de habitantes de las Islas Marshall, a pesar de que residían fuera de la zona experimental, habían sufrido los efectos perjudiciales de partículas radiactivas. Pedían que se pusiese fin inmediatamente a todos los experimentos de ese tipo, o que, si se consideraba que tales experimentos eran absolutamente necesarios para la paz y la seguridad, se tomasen todas las precauciones necesarias y se indemnizase a los habitantes apropiadamente. La segunda petición (T/PET.10/27) procedía de un residente de los Estados Unidos que deploraba la destrucción total de una isla que estaba bajo el régimen de administración fiduciaria de las Naciones Unidas y preguntaba qué medidas se proponía adoptar las Naciones Unidas para evitar que la Autoridad Administradora continuase una acción destructiva de esa índole.

La tercera petición (T/PET.10/26) contenía una propuesta elevada por una sociedad comercial contra el subsidio concedido sin interés por la Autoridad Administradora por la suma de 100.000 dólares a la Marshall Islands Import-Export Company.

En su 197a., 198a. y 200a. sesiones, el Comité Permanente de Peticiones, integrado por los representantes de Bélgica, Francia, India, el Reino Unido, Siria y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, realizó un examen preliminar de las peticiones y observaciones (T/OBS.10/3 y 4) presentadas al respecto por la Autoridad Administradora, y sometió al Consejo un informe sobre esta cuestión³⁹.

En su 561a. sesión, el Consejo examinó el informe del Comité Permanente de Peticiones y aprobó tres resoluciones relativas a las peticiones.

En su resolución 1082 (XIV), el Consejo lamentó profundamente que algunos habitantes de dos atolones de las Islas Marshall hubieran sido víctimas de los efectos nocivos de las últimas experiencias nucleares efectuadas en el Territorio por la Autoridad Administradora, que estos dos atolones hubieran sufrido daños, y que los habitantes de uno de ellos se hubieran visto en la imposibilidad de regresar a sus hogares antes de un año aproximadamente; tomó nota de que la Autoridad Administradora había adoptado las medidas necesarias para suministrar a los habitantes afectados la atención médica y los cuidados necesarios;

³⁹ Documentos Oficiales del Consejo de Administración Fiduciaria, 14º período de sesiones, Anexos, tema 5 del programa, documento T/L.510.

tomó nota con satisfacción de que, según se informaba, las personas afectadas se habían restablecido completamente, de que los habitantes de Utiirik, el mayor de los dos atolones, habían podido regresar al lugar, donde se les había proporcionado nuevas viviendas y otras facilidades, y de que se habían adoptado disposiciones a fin de indemnizar a los habitantes de los dos atolones que formularan reclamaciones justificadas; acogió con satisfacción las seguridades dadas por la Autoridad Administradora en el sentido de que ningún habitante tendría que abandonar definitivamente su hogar; instó a la Autoridad Administradora a que asegurase el regreso de los habitantes de Rongelap a sus hogares tan pronto como la situación del atolón lo permitiese, y que suministrara a dichos habitantes la mayor asistencia posible en su reinstalación; instó a la Autoridad Administradora a que atendiese con prontitud y benevolencia las solicitudes de indemnización que presentasen los habitantes interesados; y finalmente, recomendó a la Autoridad Administradora que si estimaba necesario continuar sus experimentos nucleares en el Territorio en interés de la paz y la seguridad internacionales, se sirviera adoptar las precauciones necesarias, incluso las medidas que solicitaran los peticionarios, para que ninguno de los habitantes del Territorio volviese a correr peligro.

En su resolución 1081 (XIV) el Consejo señaló a la atención del peticionario las observaciones de la Autoridad Administradora e invitó al Secretario General a comunicar al peticionario el texto de la resolución aprobada por el Consejo sobre la solicitud hecha por la población de las Islas Marshall.

En su resolución 1080 (XIV) el Consejo señaló a la atención del peticionario las observaciones de la Autoridad Administradora y resolvió que no existía motivo alguno para intervenir ante la Autoridad Administradora acerca de la concesión a la Marshall Islands Import-Export Company de un crédito por 100.000 dólares, libre de interés.

Parte II

CONDICIONES EXISTENTES EN EL TERRITORIO EN FIDEICOMISO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Reseña de las condiciones en el Territorio y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

El Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico comprende los archipiélagos de las Marshall, las Carolinas y las Marianas, con excepción de Guam. Estas islas están diseminadas sobre unos 3.000.000 de millas cuadradas de océano al norte del Ecuador, entre el 1º y el 20º de latitud Norte y el 130º y el 172º de longitud Este. Se distinguen dos grandes tipos de islas: las islas altas, volcánicas, y las islas bajas, de coral; la superficie total del Territorio es de 687 millas cuadradas.

La población indígena es de 57.842 habitantes, que pertenecen al grupo micronesio; se subdivide en varios grupos regionales y locales, de características físicas y de costumbres más o menos diferentes, y que hablan nueve idiomas distintos.

La Misión Visitadora de 1953 subrayó en particular las dificultades de administrar una población dispersa sobre una superficie tan vasta, y de garantizar las co-

municaciones necesarias. A juicio de la Misión, los principales obstáculos para la adaptación política, económica y social del Territorio a la civilización moderna parecían residir en las condiciones geográficas, en las diferencias culturales y lingüísticas que separaban a sus habitantes, y a la fuerza de las tradiciones raciales.

En su 14º período de sesiones, el Consejo aprobó, con relación al desarrollo general del Territorio y de sus habitantes, las siguientes conclusiones y recomendaciones:

El Consejo toma nota con interés que la Autoridad Administradora pone en práctica la política de alentar a la población autóctona a adaptarse a las condiciones de vida políticas, económicas y sociales modernas, de una manera compatible con las condiciones particulares del Territorio y de conformidad con los deseos libremente expresados de la población. No obstante, el Consejo señala a la atención de la Autoridad Administradora las declaraciones que han sido formuladas en el curso de sus debates y según las cuales podría promoverse un ritmo más rápido de desarrollo en algunos aspectos.

El Consejo toma nota de que el Territorio forma parte actualmente de la región del Pacífico Occidental de la Organización Mundial de la Salud y que ha continuado su cooperación con las Naciones Unidas y con la Comisión del Pacífico Meridional. El Consejo considera que cabe felicitar a la Autoridad Administradora por haber hecho posible la participación del Territorio en estas formas diversas de cooperación internacional

Movimiento de población

La Autoridad Administradora declaró que una de las características principales de su política había sido reintegrar a los isleños a aquellos lugares en que se considerasen como en su propia tierra o a otros en que desearan vivir. Antiguamente Yap, Truk y Ponape recibían a emigrantes procedentes de pequeñas islas vecinas. Varios centenares de habitantes de Saipán se trasladaron a otras islas Marianas septentrionales, y otro grupo procedente de Chamarros se trasladó a Tinian en 1948. Sin embargo, la Autoridad Administradora citó el ejemplo de los habitantes de Bikini y Eniwetok, trasladados a causa de los ensayos nucleares, como uno de los casos en que no se había podido satisfacer los deseos de la población de regresar a sus tierras.

La Misión Visitadora se enteró de que la población de Bikini, reasentada en Kili en 1948, se adaptaba gradualmente a su nuevo país, pero que persistían aún algunas dificultades, y que la Administración estudiaba la manera de proporcionar nueva asistencia. En el 12º período de sesiones se comunicó al Consejo que la población de Bikini deseaba una isla del tipo atolón, que se estaba tratando de encontrar una, y de determinar si se justificarían los gastos de un nuevo traslado.

Observaciones de los miembros del Consejo, hechas a título personal únicamente

Consideraciones generales

El representante de Francia estimó que el año que se está examinando representa un período de progreso metódico, principalmente en el terreno político, y expresó la convicción de que el Consejo tomaría nota de ello con satisfacción.

El representante de Bélgica declaró que, en general, la Autoridad Administradora había cumplido las obligaciones que le impone la Carta y el Acuerdo de Administración Fiduciaria, y propuso que el Consejo expresase su satisfacción por la forma en que la Autoridad Administradora cumplía su misión.

El representante de Nueva Zelandia tomó nota con agrado de las obras realizadas durante el año. Consideró que la atención del Consejo debería dirigirse actualmente a las normas básicas de la Autoridad Administradora y al ritmo de progreso en su aplicación, más bien que sólo a los detalles. Aprobó la norma de la Administración de evolucionar en forma prudente y mesurada.

El representante de Australia compartió la opinión de que, en general, no debía fomentarse un progreso demasiado rápido, pero señaló que, a juzgar por los acontecimientos, algunos factores exigían quizás un progreso más rápido en algunos campos que en otros; así por ejemplo, las señales de aumento de población en algunas islas podrían hacer necesaria, ya sea la utilización de nuevas regiones para reasentamiento, punto que la Autoridad Administradora está estudiando, o bien apresurar el desarrollo de nuevos medios de producción.

Declaró que el Consejo debía tomar nota de que el Territorio formaba ahora parte de la región del Pacífico Occidental de la Organización Mundial de la Salud y que ha seguido colaborando con las Naciones Unidas y con la Comisión del Pacífico Meridional. Debe felicitarse a la Autoridad Administradora por su participación en estas diversas formas de cooperación internacional.

El representante del Reino Unido declaró que el Consejo de Administración Fiduciaria debía expresar su satisfacción ante la obra realizada por la Autoridad Administradora durante el año anterior, en cumplimiento de sus obligaciones para con la población del Territorio en fideicomiso.

El representante de Haití manifestó que la población del Territorio debía recibir continua y creciente ayuda de la Autoridad Administradora para resolver sus dificultades. No creía en el concepto paternal, pero sin embargo opinaba que en muchos casos, tales como en la instalación de servicios de enseñanza, médicos o agrícolas, el esfuerzo principal sólo lo podía hacer la Autoridad Administradora, la cual, por su parte, podía conseguir la colaboración activa de la población local.

El representante de El Salvador declaró que el factor geográfico y las diferencias de lenguaje y costumbres hacían difícil el cumplimiento de la tarea de la Autoridad Administradora, y que, en consecuencia, no obstante los esfuerzos hechos, no se podía honradamente afirmar que se advirtiese algún progreso considerable en el desarrollo del Territorio durante el período que se estaba examinando. Se había hecho algún progreso en lo relativo al logro de la autonomía, principalmente con respecto al progreso político, pero la situación era casi la misma que cuando la Misión Visitadora pasó por el Territorio. Opinó que el progreso no debía dejarse únicamente a la evolución, sino que era necesario estimular a los habitantes e imprimir un ritmo más rápido a dicha evolución.

Movimiento de población

El representante de India sostuvo que ni el Acuerdo de Administración Fiduciaria ni referencia alguna a

zonas estratégicas facultaban a la Autoridad Administradora para que emplease partes del Territorio para explosiones tales como el ensayo de armas nucleares o termonucleares. La autorización se confiere únicamente para fines estratégicos, y no para fines que puedan provocar la muerte de las personas y la destrucción de colonias. La Autoridad Administradora tiene la obligación de conservar los recursos humanos de la región. Tiene además la obligación de proteger los monumentos históricos del Territorio.

El representante de Nueva Zelandia declaró que, en lo relativo a los ensayos nucleares, debían tenerse presentes ciertos factores que dieron margen a la petición de los habitantes de las islas Marshall. Señaló que el representante de la Autoridad Administradora había asegurado al Consejo que, aunque en las condiciones actuales era necesario continuar los ensayos, no se omitiría nada de aquello que pudiese proteger el bienestar actual y futuro de los isleños. Declaró que aceptaba esa garantía y reconocía que la Autoridad Administradora atribuía la debida importancia a las consecuencias de esos ensayos.

El representante de Haití declaró que parecía que los habitantes de Eniwetok y de Bikini no estaban satisfechos con las condiciones en que vivían, no obstante reconocer que la Autoridad Administradora había hecho algunos esfuerzos para tratar de reasentarlos en otra parte. Los recursos técnicos y financieros con que cuenta la Autoridad Administradora deben permitirle actuar con toda la generosidad posible para que ese sector de la población se readapte a una forma normal de vida.

El representante de Siria declaró que el análisis del problema que los ensayos termonucleares planteaban desde el punto de vista humano y moral complicaría los esfuerzos por alcanzar una solución, y por tal razón, aunque no le eran indiferentes esos aspectos, prefería considerar el lado jurídico del problema. No creía que hubiera inconveniente en acudir a la Corte Internacional de Justicia, si se hacía con el fin de aclarar el problema jurídico.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que, faltando a sus obligaciones de Autoridad Administradora, los Estados Unidos de América desterraban a los habitantes de una isla a otra y no tomaban las medidas adecuadas para garantizar su existencia. La suerte de la población de Bikini era un ejemplo típico de esa política. Fueron expulsados de Bikini en marzo de 1946, y esta isla se transformó en un campo de ensayos para las bombas atómicas de los Estados Unidos. Se sabía que la Isla de Bikini tenía un suelo fértil, una laguna rica en peces. La población fué trasladada a la pequeña isla de Rongerik donde, no obstante las promesas hechas por las autoridades de los Estados Unidos, no habían recibido ninguna ayuda para su reasentamiento. Dos años más tarde fueron trasladados a Kwajalein, donde tampoco recibieron ayuda alguna de la Autoridad Administradora. En ambas islas habían pasado hambre. Finalmente fueron trasladados a Kili, isla pobre en recursos naturales y aislada del mundo exterior durante siete meses del año debido a la violencia de las olas. Para poder subsistir allí se veían obligados a despejar la selva sin más instrumentos que pequeños cuchillos y tres hachas, y un corresponsal americano que los visitó informó que los habitantes de Bikini llamaban a Kili "la isla de los hambrientos" y la "prisión".

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señaló también que la Autoridad Administradora había tratado de ocultar al Consejo de Administración Fiduciaria la verdadera situación de la población de Bikini mediante falsas declaraciones, tales como la que formuló el representante de los Estados Unidos el 12 de julio de 1949, de que los habitantes de Bikini estaban contentos con su suerte y que la Autoridad Administradora había tomado todas las medidas necesarias para garantizar su prosperidad. Mientras tanto, en la pretendida consulta de la Autoridad Administradora con la población, en lo relativo a la elección de una nueva residencia, ésta fue burdamente engañada. La Autoridad Administradora no sólo no había promovido el progreso político, económico y social de la población, sino que la había privado de su principal fuente de subsistencia, que era la tierra, y había originado indecibles sufrimientos a esa pequeña población abandonada a su suerte.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró además que el Consejo de Administración Fiduciaria no podía limitarse a expresiones de simpatía o a recalcar pretendidos éxitos en cuanto a progreso, pues tales afirmaciones eran falsas. Sobre esos habitantes se cernía una verdadera amenaza de extinción física por hambre y por el ensayo de bombas de hidrógeno, y el Consejo de Administración Fiduciaria no debía hacer caso omiso de esa situación.

Se ha comunicado al Consejo que se había curado a aquellos que sufrieron a consecuencia de las explosiones de la bomba de hidrógeno, pero tal declaración no había podido ser confirmada. El Consejo debía insistir ante la Autoridad Administradora a fin de que ésta desistiera de ensayos de bombas hidrógenas y atómicas en el Territorio en fideicomiso, pues tales ensayos habían causado ya la destrucción de parte del Territorio y daños irreparables a la población autóctona.

El representante especial de la Autoridad Administradora dijo que los representantes de dicha Autoridad no trataban de ocultar hecho alguno al Consejo o de engañar mediante falsos informes o declaraciones como lo pretendía el representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un personal médico competente había garantizado el restablecimiento de la población afectada por la bomba de hidrógeno. El representante especial agregó que había visto y hablado a las personas afectadas y observado que las que habían perdido su cabello lo estaban recuperando. Informó que lo que se produjo en el caso del ensayo de la bomba de hidrógeno se debió, según le habían informado, a un hecho muy extraordinario, y que había ocurrido sólo una vez en todos los ensayos realizados. El último control meteorológico se hizo a medianoche antes de la explosión de las primeras horas de la mañana siguiente. Este intervalo había sido siempre adecuado. Sin embargo, se toman actualmente medidas y se formulan garantías de que en los futuros ensayos no habrá incidentes desfavorables ni nuevos accidentes. El representante especial declaró que la idea de una cínica despreocupación por el bienestar y los derechos de los micronesios, según expresión del representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era un concepto totalmente extraño a la Administración y no podía comprender cómo pudiera atribuírsele actitud semejante.

El representante especial recordó además que, cuando se eligieron los atolones de Bikini y Eniwetok para

ensayos atómicos, se concedió a la población, como transacción, justa y equitativa, un título de propiedad sobre los atolones de Ujeland y Rongerik, respectivamente. Ujeland satisfizo a la población de Eniwetok. El pueblo de Bikini sin embargo, encontró más tarde que el atolón de Rongerik era inaceptable, y se les trasladó a Kwajalein, donde la Marina les proporcionó alimento, alojamiento, atención médica y diversiones, vestuario, etc. Permanecieron allí ocho meses y llegaron a depender hasta tal punto de la Marina, que disminuyó su interés por atender a sus propias necesidades. Como se hizo evidente que había que retirar a los habitantes de Bikini de Kwajalein y colocarlos en un lugar en que pudiesen ocuparse por sí mismos de sus asuntos, se buscó cuidadosamente un nuevo atolón que estuviese disponible, desocupado, y que no perteneciese a otra población. Se eligió la rica isla de Kili, antiguamente una plantación alemana de copra, como un lugar adecuado, y los mismos habitantes de Bikini la prefirieron a otras posibilidades. Aunque esta isla produce copra en abundancia, había sido descuidada, estaba invadida por la vegetación y no tenía laguna. La falta de laguna era grave, porque los habitantes de las islas del Pacífico están acostumbrados a depender de ella como fuente de pesca y de otros alimentos marinos. En consecuencia, la Administración vió que era difícil que los habitantes de Bikini se acostumbraran a vivir en Kili. Se tomaron las medidas necesarias para que cruzasen más o menos 30 millas de océano y fuesen a pescar en la laguna de Jaluit. Empero, debido al mal tiempo, hay meses en el año en que no es fácil que una embarcación pequeña haga dicho viaje. Los habitantes de Bikini perdieron un bote proporcionado para este fin y tuvieron desde entonces que servirse de canoas pequeñas.

El representante especial dijo que la Autoridad Administradora reconocía que los habitantes de Bikini debían endurecerse para poder adaptarse a la vida en Kili, que había estado buscando medios de ayudarles sin menoscabar en ellos la convicción de que debían atender a sus propias necesidades. Se eligió a un joven micronesio, con aptitud dirigente, para que, después de seguir un curso de capacitación en desarrollo de la comunidad en la Universidad de Hawaii, se encargase de mejorar los sistemas agrícolas de Kili, trabajando en colaboración con los jefes y la población de Bikini. Trajo a Kili un grupo compuesto de un experto en el cultivo del taro y de otro experto en artesanía. Ha logrado que la población de Bikini desmonte una parte de la isla y plante nuevas variedades de taro, bananas, burí, árbol del pan, papayas, calabazas y batatas. Se ha intensificado la producción de copra. El joven micronesio alienta también otras empresas económicas, incluso las empresas artesanales y la producción de *jekemai* — jarabe que se extrae del tallo de la flor del cocotero. Los productos de estas empresas tienen un buen mercado en Kwajalein y en Ebeye. En un año o dos confía en poder exportar excedentes de taro. Se fabricaban también cuerdas de fibra trenzada, se exportaba carbón y se proyectaba la creación de un vivero. Con las utilidades se comprará un bote de 50 pies a las islas Marshall.

El representante especial declaró además que se estaban estudiando planes para que los habitantes de Bikini pudiesen cruzar de Kili a Jaluit con seguridad y frecuencia a fin de dedicarse a la pesca, a la crianza de cerdos y al comercio. Se proyecta instalar en

forma permanente a algunos habitantes de Bikini en pequeñas islas del atolón de Jaluit y establecer un sistema de radiocomunicaciones entre las islas de Majuro, Jaluit y Kili, para que se puedan consultar las condiciones atmosféricas existentes entre Jaluit y Kili antes de despachar las embarcaciones. Se estudia todavía el problema de proporcionar muelles adecuados para las pequeñas embarcaciones de Kili.

Como es evidente que los habitantes de Bikini no podrán volver a este atolón en un futuro próximo, y no hay, por lo demás, en el Territorio un atolón adecuado y conveniente para ellos, la Administración tiene sumo interés en saber si las mejoras que se están haciendo en Kili producirán resultados satisfactorios. Los problemas económicos están mejorando en forma indiscutible y prometen resolverse razonablemente.

II. PROGRESO POLÍTICO

Reseña de las condiciones generales y recomendaciones aprobadas por el Consejo

Administración del Territorio

En 1951 la responsabilidad administrativa del Territorio en fideicomiso fue transferida al Secretario del Departamento del Interior, y de acuerdo con éste se invistió de autoridad ejecutiva y legislativa al Alto Comisionado nombrado por el Presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, durante el año que se está examinando, la responsabilidad de la administración del Distrito de Saipán, con excepción de Rota, se transfirió al Secretario de Marina el cual confió la autoridad ejecutiva y legislativa del gobierno del distrito al Comandante en Jefe de la Flota de los Estados Unidos del Pacífico. Esta autoridad se delegó al Comandante de las Fuerzas Navales de las Marianas el cual, a su vez, nombró un administrador civil del distrito. La Autoridad Administradora declaró que el cargo de este funcionario es similar al de los administradores de distrito de los otros distritos del Territorio, y que cuando en el informe anual se alude a los administradores de distrito, dichas alusiones se extienden al administrador civil del Distrito de Saipán.

En su 12º período de sesiones el Consejo señaló que una parte del Territorio había sido nuevamente colocada bajo administración naval, y pidió a la Autoridad Administradora que se asegurara de que las normas generales que se aplicaban en las diversas partes del mismo se coordinasen de manera que aseguraran a los habitantes la necesaria estabilidad en la administración, conservando al mismo tiempo las características generales del Territorio. La Autoridad Administradora informó al Consejo que el Alto Comisionado y el Comandante en Jefe de la Flota del Pacífico estaban facultados para coordinar personalmente en todos los distritos del Territorio lo relativo a los diversos programas, tales como aquellos que se refieren al desarrollo económico, a la agricultura, sanidad y enseñanza.

El Territorio comprende seis distritos, incluso el Distrito de Saipán. La organización administrativa, colocada bajo la autoridad del Alto Comisionado, con excepción del Distrito de Saipán, se compone del Alto Comisionado Adjunto y servicios centrales en Hawaii, un personal local en Guam y una oficina de distrito en cada uno de éstos, bajo la autoridad de un administrador local.

Los decretos de distrito que se aplican a un distrito en especial son promulgados por el administrador del distrito con la aprobación del Alto Comisionado. Dichos decretos pueden ya sea formularse como resultado de recomendaciones hechas por el Consejo consultivo de distrito, o basarse en resoluciones de un congreso de distrito o ser propuestos por el administrador del distrito.

El 22 de diciembre de 1952 el Alto Comisionado firmó el Código del Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, las cuales disponen así de una ley orgánica. Esta se aplica en todo el Territorio y se la complementa en los distritos y municipios con leyes adicionales de aplicación local y dictadas de acuerdo con el Código.

El personal administrativo no autóctono del Territorio en fideicomiso está compuesto por oficiales de marina y por funcionarios federales cuyos cargos, en virtud de una decisión de la Comisión de Funciones Públicas (Civil Service Commission), quedan al margen de la *Civil Service Act and Rules*. Sin embargo, se han adoptado las normas de clasificación del Civil Service con respecto a distribución de puestos y calificación del personal, para todas las medidas relacionadas con el personal administrativo.

Todos los miembros calificados de la población pueden optar a cualquier puesto público del Territorio en fideicomiso y es norma constante de la Autoridad Administradora nombrar para todos esos cargos a micronesios, siempre que reúnan las condiciones necesarias. Por el momento, un número limitado de micronesios ocupa puestos administrativos de suficiente importancia en los diversos servicios del Gobierno. La Autoridad Administradora señaló sobre este punto que había que reconocer que a la mayor parte le era difícil asimilar los conceptos de autonomía y la idea de que pudieran contribuir a la administración de su propio país, pues hasta hace algunos años a esa mayoría se le concedieron muy pocas o ninguna oportunidad de participar en dicha labor. Es relativamente sencillo preparar a personas para trabajos de oficina, pero hay pocos puestos para esta clase de actividades. Por el contrario, se necesitará considerable tiempo y experiencia para preparar personal autóctono que asuma las responsabilidades no profesionales de mayor importancia.

Se comunicó que se había realizado considerable progreso en el programa de la Autoridad Administradora encaminado a reemplazar a los empleados estadounidenses por micronesios. Mientras los empleados micronesios progresan en capacidad y conocimientos, la tendencia en materia de empleo ha sido de mantener un personal reducido. Los micronesios empleados por las unidades administrativas de distrito y por los servicios de policía ascendían a un total de 1,543 al 30 de junio de 1953, en comparación con 1,564 del año anterior. El número de personal no autóctono disminuyó de 301 a 283 durante el mismo período.

Desde octubre de 1952 se ha estado preparando un programa general de formación profesional y de enseñanza de la lengua inglesa, cuando un especialista en formación industrial inició un estudio práctico con clases experimentales. Cuando este programa entre en vigor, todos los empleados deberán seguir cursos de formación profesional.

El Consejo recomendó a la atención constante de la Autoridad Administradora las sugerencias de la Mi-

sión Visitadora relativas a la importancia de proporcionarse personal técnico y administrativo convenientemente calificado para que preste servicios en el Territorio por un período bastante prolongado.

El Consejo recordó las opiniones que había formulado anteriormente, en cuanto a la conveniencia de establecer la sede administrativa del Territorio dentro del territorio mismo, y señaló que las ventajas y desventajas de un traslado al sitio que se había elegido estaban más o menos equilibradas. Recomendó a la Autoridad Administradora que siguiese estudiando todas las consecuencias de una decisión sobre la materia, teniendo en cuenta no sólo aquellas de importancia práctica inmediata, sino también las que pudieran plantearse a medida que los habitantes autóctonos asumiesen gradualmente la responsabilidad, y le pidió que incluyera los resultados de este nuevo estudio en su próximo informe anual. La Autoridad Administradora informó al Consejo en su 14º período de sesiones que, con posterioridad al período comprendido en el informe anual, se había decidido trasladar a Guam la sede del Alto Comisionado. Esta nueva ubicación tendría un carácter provisional hasta que se dispusiera de fondos para construir los edificios de la sede dentro del mismo Territorio en fideicomiso. Antes de que se tomase esta decisión los Departamentos de Sanidad y de Instrucción Pública habían sido trasladados a Ponape y Truk, respectivamente, islas que están ubicadas dentro del Territorio en fideicomiso.

En su 14º período de sesiones, el Consejo adoptó las siguientes recomendaciones:

El Consejo toma nota de la declaración formulada por la Autoridad Administradora de que, como medida provisional, se ha trasladado de Honolulu a Guam la sede de la Administración, hasta que se disponga de fondos para ubicarla dentro del Territorio en fideicomiso. Con respecto a este punto el Consejo recuerda la opinión que ha formulado anteriormente sobre la conveniencia de establecer la sede administrativa del Territorio dentro del Territorio mismo, y su recomendación del 12º período de sesiones a la Autoridad Administradora de que siguiese estudiando todas las consecuencias de la decisión que se adopte sobre esta materia, tomando en cuenta no sólo aquellas que son de importancia práctica inmediata, sino también las que se planteen a medida que los habitantes autóctonos asuman gradualmente las responsabilidades. El Consejo expresa la esperanza de que la Autoridad Administradora seguirá estudiando la cuestión del traslado de la sede a un lugar situado dentro del Territorio en fideicomiso, y que se tomará una decisión tan pronto como se disponga de fondos para este fin.

El Consejo señala a la atención de la Autoridad Administradora las observaciones formuladas por los miembros del Consejo con respecto a la dispersión de los servicios de la sede en varios distritos, y pide que se le tenga al corriente de cualquiera decisión que se tome sobre esta materia.

El Consejo toma nota y aprueba la norma de la Autoridad Administradora de reemplazar gradualmente al personal no autóctono de la Administración por habitantes indígenas, y de nombrar a éstos para puestos de más responsabilidad cada vez que sea posible. El Consejo expresa la confianza de que la Autoridad Administradora tomará medidas para colocar a más habitantes autóctonos en todos los puestos de la Administración, siempre que reúnan los requisitos necesarios.

Desarrollo de la autonomía

Actualmente, la autonomía de que se disfruta en el Territorio en fideicomiso se limita al gobierno local de los municipios. Estos constituyen las unidades básicas de gobierno y los únicos organismos gubernamentales autóctonos con cierta autoridad jurídica autónoma.

El control legislativo que ejerce la Administración exige que las leyes municipales estén de acuerdo con la ley territorial, y que los impuestos, presupuestos y gastos municipales cuenten con la aprobación del administrador de distrito. El jefe del municipio es un funcionario que puede ser elegido por votación popular, nombrado previa consulta por el administrador de distrito, o elegido por derecho hereditario.

Con la promulgación del Código del Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, cesó en sus funciones el Comité Legislativo Consultivo compuesto de cinco jefes de departamentos del personal. Este Comité había constituido un paso preliminar hacia la creación de un órgano legislativo para el Territorio. La legislación básica para conceder la autonomía fue reemplazada por secciones del nuevo código que facilitan el desarrollo de la autonomía entre las instituciones sumamente variadas que existen en el Territorio en fideicomiso.

Fuera de los municipios, no existen en el Territorio órganos ejecutivos autóctonos de gobierno. Sin embargo, en todos los distritos funcionan órganos consultivos que corresponden a diversos grados de desarrollo y representación de distrito. La Misión Visitadora señaló que, aunque estos órganos son esencialmente consultivos, los administradores de distrito rara vez tratan de imponer reglamentos locales sin conseguir primero su aprobación. No se conservan actas resumidas de sus reuniones, si bien los congresos organizados preparan un resumen o minuta de cada sesión. Las resoluciones u otras medidas comunicadas a la administración para su información o aprobación se traducen al inglés. Saipán, Palaos, Ponape y las Islas Marshall tienen cada una un congreso. Palaos, el atolón de Truk y Trínian tienen consejos, y Yap un consejo consultivo.

En su 12º período de sesiones el Consejo de Administración Fiduciaria acogió con agrado la conclusión de la Misión Visitadora de que se había obtenido un grado significativo de progreso político, y apoyó la decisión de la Autoridad Administradora de dedicarse principalmente a fomentar la autonomía en los distritos.

El Consejo observó con interés los constantes esfuerzos de la Autoridad Administradora por establecer órganos representativos de gobierno en los distritos y, a la vez que alentó que se continuasen realizando los planes destinados a crear dichos órganos en cada uno de ellos, recomendó que se tomaran todas las medidas prácticas necesarias para asegurar que en cada distrito, y principalmente por ahora en el caso de Saipán, la isla o atolón en que esté ubicada la sede del distrito, no asuma un predominio desproporcionado, con detrimento de los intereses de las regiones alejadas. Recomendó además que la Autoridad Administradora, ante la posible creación de un órgano representativo central del Territorio tomado en su totalidad, tratase de establecer en la medida de lo posible órganos uniformes de gobierno autónomo en los distritos.

El Consejo tomó nota también de la observación de la Misión Visitadora de que la diversidad artística y

cultural, y la dispersión del Territorio y de sus habitantes constituyen dificultades formidables para la unificación política, y apoyó la opinión de la Misión de que el mejor sistema de establecer un órgano legislativo central era fomentar órganos regionales y de distrito, otorgándoles creciente autoridad legislativa a medida que vayan perfeccionándose, hasta que puedan finalmente hacerse cargo de toda la legislación relativa a sus distritos.

En su informe anual para 1953, la Autoridad Administradora declaró que en la labor de impulsar la iniciativa local hacia la creación de nuevas organizaciones regionales, era muy necesaria la orientación de parte del personal administrativo. Sin embargo, la dirección no debe ser ni tan persuasiva ni tan autoritaria que los miembros de los congresos autóctonos se sientan sin autoridad y sin independencia. Este peligro se advirtió en el caso del Congreso de Ponape organizado el año pasado. En consecuencia, en vez de que la Administración asuma la dirección inmediata en las sesiones del Congreso, se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para proporcionar una atinada ayuda administrativa en forma de consejos y explicaciones sobre la manera de dirigir las reuniones y organizar los comités.

La Autoridad Administradora considera que la tendencia del desarrollo en las comunidades locales se ajusta a las recomendaciones del Consejo de Administración Fiduciaria. De los 117 municipios existentes 97 utilizan el sistema electoral para elegir magistrados y otros funcionarios. La aceptación del régimen electoral demuestra la voluntad de ensayar métodos democráticos de gobierno y el reconocimiento de la necesidad de funcionarios locales que, por su educación o cultura, estén en mejores condiciones para servir de personal de enlace con la Administración.

En su 14º período de sesiones, el Consejo adoptó las siguientes conclusiones y recomendaciones:

El Consejo toma nota de los esfuerzos realizados por la Autoridad Administradora para establecer órganos representativos de Gobierno en los distritos, y nota además que se han adoptado algunas medidas preliminares encaminadas a la formación de una conciencia política en el Territorio, pero que estas medidas no han producido todavía los resultados deseados. El Consejo expresa la confianza de que la Autoridad Administradora seguirá tomando todas las disposiciones posibles para fomentar la creación de un órgano legislativo para todo el Territorio. Con respecto a este punto, el Consejo reitera la opinión que expresó en su 12º período de sesiones, de que la forma más práctica de crear un cuerpo legislativo central es desarrollar órganos regionales y de distrito, otorgándoles creciente autoridad administrativa a medida que se perfeccionan, hasta que puedan asumir finalmente plena responsabilidad por la legislación local relativa a sus distritos.

El Consejo toma nota de la declaración de la Autoridad Administradora de que el desarrollo político del Territorio tiene como norma fundamental la evolución de las instituciones creadas a base de las costumbres y cultura de la población. Expresa la esperanza de que los habitantes colaborarán con la Autoridad Administradora para que las instituciones locales se desarrollen en forma más representativa y democrática, de manera que se simplifique la organización política del Territorio sin infringir los reglamentos y lesionar las costum-

bres de los habitantes y que ayuden a éstos a lograr la autonomía.

Ley orgánica

El Consejo recordó, en su 12º período de sesiones, sus recomendaciones anteriores en apoyo de promulgar una legislación básica para el Territorio, y advirtió con agrado que se había vuelto a proponer un proyecto de ley al Congreso de los Estados Unidos. Formuló la esperanza de que dicha ley se promulgase pronto. En su informe anual para 1953, la Autoridad Administradora declaró que el Gobierno seguía estudiando la propuesta de legislación orgánica para presentarla al Congreso.

La Autoridad Administradora comunicó ulteriormente al Consejo que se había considerado mejor continuar por más tiempo el estudio de tal legislación a fin de ajustarla a las necesidades locales. Refiriéndose a una ley promulgada recientemente por el Consejo de los Estados Unidos, que autoriza a mantener la actual administración del Territorio en fideicomiso hasta el 30 de junio de 1960, la Autoridad Administradora dijo que durante este tiempo se estudiaría una legislación orgánica que se adaptase perfectamente a las necesidades del Territorio, que se la formularía en un proyecto de ley encaminado directamente a los intereses de los habitantes autóctonos y que luego se la promulgaría.

En su 14º período de sesiones, el Consejo adoptó la siguiente recomendación:

El Consejo toma nota de la intención de la Autoridad Administradora de promulgar, en conformidad con los habitantes del Territorio y antes de 1960, la legislación orgánica del Territorio. El Consejo toma nota además de que la Autoridad Administradora reconoce la necesidad de una legislación que se adapte perfectamente a las necesidades del Territorio y se ajuste a los bien entendidos intereses de la población autóctona. El Consejo expresa la confianza de que la Autoridad Administradora promulgará esta ley tan pronto como sea posible, y en todo caso antes de 1960.

Organización judicial

La organización judicial está integrada por un tribunal superior (High Court), tribunales de distrito (District Court) y tribunales comunales (Community Court). La Sala de Apelaciones (Appellate Division) del Tribunal Superior está formada por tres jueces nombrados por el magistrado superior (Chief Justice), y la Sala de enjuiciamiento (Trial Division) del Tribunal Superior está compuesta por el magistrado superior y el segundo magistrado (Associate Justice) o por uno de ellos solamente, nombrados por el Secretario del Interior y responsables ante él, así como por jueces especiales para cada distrito en los procesos por homicidio. El tribunal de distrito de cada distrito administrativo se compone de un presidente y de uno o más jueces asesores nombrados por el administrador de distrito a propuesta hecha mediante elección popular o de otra manera, en la forma que, a su juicio, se ajuste más a los deseos de la población y a la debida administración de la justicia.

Las decisiones de la Sala de apelaciones sobre los casos vistos en primera instancia por el Tribunal Superior o sobre los casos de apelación de decisiones de los tribunales de distrito o comunales, son definitivas, a menos que el Congreso de los Estados Unidos prevea

una apelación a un tribunal creado por una ley del Congreso. La Sala de enjuiciamiento del Tribunal Superior no ejerce su jurisdicción sobre ninguna de aquellas causas que, a juicio de la misma sala, se pueden ver pronta y adecuadamente en los tribunales inferiores. Los tribunales de distrito se ocupan de todos los casos que pueden resolverse prontamente y sin inconvenientes para las personas interesadas. Ninguno de los jueces que los componen tiene todavía una formación jurídica formal, pero la Autoridad Administradora declara que se está tratando de prepararles en el ejercicio de sus funciones para que se desempeñen en lo posible con la competencia de un profesional de carrera. Los tribunales comunales intervienen fundamentalmente en las regiones alejadas que no pueden abarcar fácilmente los tribunales de distrito o en los casos de urgencia en que no se puede contar inmediatamente con un juez de tribunal de distrito. El procedimiento que se sigue en los tribunales tanto para las causas civiles como criminales es el mismo, pero más sencillo, que el que se emplea en los tribunales de distrito de los Estados Unidos que funcionan sin jurado. Los tribunales comunales gozan de gran libertad, principalmente en las causas civiles, y sólo se les exige que se ajusten a las partes más esenciales del procedimiento que se aplica en otros tribunales.

En su 12º período de sesiones el Consejo acogió con agrado la creciente participación otorgada a micronesios en los trabajos de los órganos judiciales, y principalmente el nombramiento de 21 micronesios para el puesto de jueces especiales del Tribunal Superior.

En su informe anual para 1953, la Autoridad Administradora informó al Consejo que, además de los 21 jueces micronesios especiales nombrados para prestar servicios en la Sala de enjuiciamiento del Tribunal Superior, el año anterior se había nombrado a micronesios para todos los puestos judiciales de los tribunales de distrito. Ulteriormente informó también al Consejo, durante su 14º período de sesiones, que se había nombrado un *public defender* autóctono para cada distrito y que estos *public defenders* estaban trabajando bajo la dirección inmediata del *public defender* de los Estados Unidos, quien los instruía en los rudimentos necesarios de derecho y de procedimiento.

En su 14º período de sesiones, el Consejo adoptó la siguiente recomendación:

El Consejo, recordando que en su 12º período de sesiones acogió con agrado las medidas encaminadas a otorgar una creciente participación a los micronesios en la administración de la justicia, toma nota con satisfacción de que prácticamente todos los puestos judiciales del Territorio, incluso los de jueces de distrito y de comunidad, están ocupados por miembros de la población autóctona y que se ha nombrado un public defender autóctono para cada distrito. El Consejo pide a la Autoridad Administradora que en su próximo informe proporcione nuevos detalles sobre la cuestión relativa a la codificación del derecho consuetudinario autóctono y sobre los problemas que plantea dicha codificación.

Observaciones de los miembros del Consejo, hechas a título personal únicamente

Administración del Territorio

El representante de la India expresó que todo progreso se refleja prácticamente en el grado de participación de la población autóctona en las actividades ad-

ministrativas normales. La Autoridad Administradora pretende que se están reemplazando los empleados norteamericanos por los isleños, pero las cifras prueban que eso no es así, ya que entre 1949 y 1953 ha habido un aumento de 130% en la contratación de servicios de americanos y una disminución en los de micronesios. Además, no se ve que los micronesios tengan puestos de importancia en comparación con el personal de la Autoridad Administradora.

El representante de Bélgica declaró que el Consejo vería con agrado que las diversas ramas de los servicios administrativos se acercasen más al Territorio en fideicomiso. Consideró que, aunque cuando Guam no formase parte del Territorio, el hecho de que se creara allí la sede administrativa constituiría un verdadero progreso.

Elogió la prudencia demostrada por la Autoridad Administradora en su deseo de introducir reformas sin quebrantar en forma alguna el orden establecido. Debido a que las islas del Pacífico, aisladas en una vasta porción del océano, no podían tener las mismas posibilidades que otros territorios en fideicomiso, insistió en que en la administración de este Territorio no había que perder el sentido de la realidad y que no se debía tratar de ir más allá de lo que las circunstancias permitían.

El representante de Nueva Zelandia acogió con agrado la noticia de que se estaba eliminando la incertidumbre que existía hasta ahora sobre el problema de la sede administrativa. Señaló que la ubicación de la sede dentro del Territorio, hecha a su debido tiempo, sería beneficiosa para el desarrollo de la unidad política y económica del Territorio. Proponería también una base sobre la cual se podría crear progresivamente un cuerpo de funcionarios. Confiaba en que no pasaría mucho tiempo sin que se dispusiera de fondos para establecer la sede en forma permanente.

El representante de China consideró que la siempre creciente participación autóctona en los servicios administrativos era loable. Consideró también que la decisión de trasladar la sede del Alto Comisionado de Honolulu a Guam, así como la instalación de los Departamentos de Sanidad y Educación en el Territorio, eran medidas acertadas y que permitirían cumplir en parte las recomendaciones anteriores hechas por el Consejo de Administración. Fiduciaria con respecto al establecimiento de la sede del gobierno en el Territorio mismo. Señaló que la Autoridad Administradora seguía esperando el momento en que se dispondría de fondos para construir dicha sede.

El representante de El Salvador expresó su satisfacción al saber que los principales departamentos de la oficina del Alto Comisionado debían trasladarse muy pronto a Guam, pero dijo que su satisfacción no sería completa hasta que dicho traslado se hubiese realizado. Consideraba esencial que los habitantes autóctonos siguieran ocupando puestos de mayor responsabilidad, para que así se preparasen a administrar sus propios asuntos en su propio Territorio.

El representante de Siria manifestó que, aunque no creía que fuese mala la elección de Guam como sede del Territorio, compartía la opinión del representante de Bélgica de que la distribución de determinados departamentos entre Ponape, Guam y Truk no era una buena solución.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que el análisis del informe

anual de la Autoridad Administradora había demostrado que la situación del Territorio no había mejorado en comparación con años anteriores. Por el contrario, se estaba estableciendo un régimen cada vez más severo. Si bien hacía algunos años se habían hecho algunas tentativas para traspasar la administración de las Islas del Pacífico a las autoridades civiles, ahora se había renunciado a ellas, y una vez más la Administración del Territorio estaba dividida entre el Alto Comisionado por una parte, y el Departamento de Marina de los Estados Unidos por otra. Al examinar la estructura del Gobierno se veía que se trataba de un gobierno de distrito naval y no de un gobierno civil.

El representante de la Unión Soviética se preguntaba cómo era posible que se defendieran y protegieran los intereses de la población autóctona si dicha población no estaba gobernada por sus propios representantes, elegidos democráticamente, sino por funcionarios del Departamento de Marina de los Estados Unidos. No era posible que hubiese ningún contacto entre los funcionarios del Departamento de Marina y los habitantes autóctonos pues los funcionarios estadounidenses no sabían el idioma de la población autóctona y ésta no sabía inglés. En consecuencia, los representantes de la Autoridad Administradora hacían lo que querían.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que estaba plenamente de acuerdo en que el establecimiento en Guam de la Oficina del Alto Comisionado debía ser sólo una medida temporal, y que convenía que la sede de la Administración se situase dentro del Territorio en fideicomiso. Estaba persuadido que esto se haría tan pronto como se dispusiera de los fondos necesarios.

El representante especial hizo resaltar algunas de las medidas tomadas de conformidad con la norma de la Administración de emplear a micronesios en todos los puestos para los cuales reunían las condiciones requeridas. Se podía confiar en que esa política, que ya se aplicaba plenamente, en lo relativo a los municipios, se aplicaría progresivamente en los distritos; sin embargo, pasaría todavía algún tiempo antes que la experiencia y conocimiento así adquiridos permitieran a los micronesios reunir los requisitos para formar parte del personal del Alto Comisionado. Señaló el hecho de que los micronesios habían reemplazado a los norteamericanos como directores de tres escuelas intermedias (intermediate schools), en Yap, Ponape y Majuro; que dos inspectores de enseñanza elemental eran micronesios y que en Saipán un micronesio había reemplazado a un norteamericano como agente de divulgación agrícola en ese distrito. Además, con excepción del Chief Justice y del Associate Justice del Tribunal Superior, todos los jueces y magistrados de los distritos y municipios eran micronesios.

Evolución hacia la autonomía

El representante de India señaló que no parecía haberse hecho mucho progreso en lo relativo al establecimiento de un órgano legislativo territorial. Los únicos órganos de carácter representativo que existían eran municipales. Se hacía cargo del hecho de que las islas eran numerosas y su población reducida, pero creía, sin embargo, que no se estaba aplicando la política de la Autoridad Administradora de crear órganos nacionales.

El representante de Francia observó con satisfacción que todos los distritos habían sido provistos en alguna

forma de consejos consultivos durante el año examinado y declaró que la principal misión de la Autoridad Administradora por el momento era alentar tales consejos, fomentar el interés en el trabajo local y la administración democrática de sus propios asuntos. Creía que por ahora sería prematuro prever el establecimiento de instituciones autóctonas en todo el Territorio, pero que parecía posible fomentar, o aún crear, oportunidades para que los habitantes autóctonos discutieran unos con otros determinados problemas de interés común.

Observó además con agrado el aumento en el número de funcionarios locales elegidos, y expresó su confianza en que se evolucionaría sin dificultad y se aplicaría el sistema electoral en todo el Territorio.

El representante de Australia tomó nota con satisfacción de que la organización de distrito estaba progresando favorablemente, aunque en algunos estaba más adelantada que en otros. Creía que el sistema empleado por la Administración para el desarrollo del gobierno interregional era adecuado; que se debía consolidar el desarrollo local y que la población debía adquirir perfecta noción del gobierno regional antes de que se pudiera progresar rápidamente en el desarrollo del concepto más amplio de gobierno interregional.

Refiriéndose a la conferencia sobre autonomía celebrada en Truk, el representante de China expresó su opinión de que, aunque no se habían logrado en ella resultados tangibles, el hecho de que los delegados mostrasen tan gran interés en problemas comunes de carácter político y social, daba margen para confiar en que la conferencia constituía un hecho significativo y prometedor de futuras reuniones de carácter similar, que podrían conducir a la creación de una organización central administrativa para el Territorio. Esperaba que, mientras tanto, la Administración seguiría estudiando la posibilidad de adoptar esta medida.

El representante del Reino Unido señaló con satisfacción que el desarrollo político de la población continuaba en forma práctica y razonable, en completa armonía con el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y el Acuerdo de Administración Fiduciaria. Aprobaba una política que tratase de proceder constructiva, prudente y atinadamente, basándose en las costumbres y culturas micronesias, y que procurase introducir los mejores elementos de cultura extranjera en la medida y momento en que los micronesios demostraran que estaban dispuestos y deseosos de asimilarla. Tomó nota con satisfacción de que la forma en que la Autoridad Administradora enfocaba este problema era objetiva y prudente.

El representante de Siria declaró que tenía la impresión de que había un número excesivo e innecesario de órganos políticos, que eran por el hecho mismo perjudiciales, y que no podía fomentarse el desarrollo político de la población creando tantos órganos de gobierno, tales como una asamblea elegida, otra para notables, y ciertos comités que existían en muchos distritos. Señaló a propósito de esto que no cabía duda de que la Autoridad Administradora deseaba observar la mayor circunspección con respecto a las tradiciones y costumbres establecidas. El representante de Siria se preguntaba si no sería posible respetar debidamente tales tradiciones y costumbres en una forma más sencilla. Se podría persuadir a los notables a que apreciaran el valor de la elección, y que se convenciesen de la conveniencia de reunirse juntos con sus demás colegas. Conforme a estas mismas normas, una simplificación de la máquina

política conduciría al sistema unicameral y a la verdadera democracia, sin perjudicar reglas y costumbres caras a la población, y resultarían de una utilidad indiscutible. En lo relativo al ritmo del cambio político, opina que ninguna medida destinada a abreviar el período de administración fiduciaria puede calificarse de precipitada, siempre que se apoye en una base sólida.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que la población local estaba privada de todos los derechos de la autonomía. La alusión que se hacía en el informe de la Autoridad Administradora al hecho de que la población autóctona disponía de órganos de autonomía en los municipios era una alusión a un fenómeno ilusorio, porque los habitantes autóctonos no participan en el gobierno de los municipios. Aun la Misión Visitadora, ha señalado que la autonomía de los municipios es más bien aparente que real, pues el jefe de tal comunidad deriva su autoridad de sucesión hereditaria o es un jefe nombrado por las autoridades, es decir, por un funcionario norteamericano de acuerdo con el jefe. En consecuencia, no hay indicios de una verdadera autonomía basada en los principios democráticos.

Lo mismo sucedía con respecto a la legislación del Territorio. No existía legislación que asegurase o fomentase el desarrollo progresivo de órganos de administración local en el Territorio, o que previera la creación de órganos democráticos centrales de autonomía. La Autoridad Administradora, escudándose en diversos pretextos, tales como la amplia dispersión de las islas, las grandes distancias que había que recorrer, etc., había aplazado la creación de órganos centrales a una remota y vaga fecha del futuro.

Se debía recordar a la Autoridad Administradora que las Naciones Unidas habían confiado el Territorio a los Estados Unidos, no para que se lo convirtiera en una base naval estadounidense, sino para que se ocupara de la población.

El representante especial de la Autoridad Administradora recordó que la Misión Visitadora había señalado que había mucho que hacer antes de que se alcanzara un grado suficiente de progreso que permitiera discutir asuntos políticos en un plano más amplio que el de distrito. Después del nuevo estudio de la situación realizado el año pasado, se puede muy bien recalcar este mismo hecho. Para establecer cualquier órgano legislativo territorial se necesita todavía algún tiempo, y crearlo prematuramente acarrearía más daños que beneficios. Señaló con respecto a este punto los problemas de lenguaje, distancias, diversidad cultural y la consiguiente falta de suficiente comunidad de intereses en el Territorio en general.

El representante especial declaró además que el programa de desarrollo político del Territorio se basaba en el método del desarrollo progresivo fundado sobre las costumbres y cultura de la población del Territorio. La mejor manera de elaborar nuevos conceptos de gobierno que modifiquen favorablemente el sistema tradicional es partir de la unidad local con sus costumbres, o sea, en general, del municipio, de la familia tomada en un sentido amplio o del clan. En diversas regiones, el progreso realizado fuera del municipio se debía a la creación de organizaciones de distrito en cuyos órganos consultivos participaban micronesios. Sin embargo, en la mayor parte de los distritos estos órganos no habían progresado todavía lo suficiente para que se le concedieran facultades legislativas.

El representante especial declaró finalmente que debía haber habido alguna confusión en las informaciones transmitidas a la Misión Visitadora con respecto al Comité Legislativo Consultivo. Explicó que este Comité estaba formado totalmente por personal norteamericano perteneciente a los servicios del Alto Comisionado. Su labor principal consistía en preparar un código y en redactar una ley orgánica; hecho esto, el Comité cesaría en sus funciones. Actualmente, el Comité Legislativo Consultivo ha sido reemplazado por comités consultivos o antiguos comités compuestos de micronesios que trabajan con el personal norteamericano en cada distrito; estos comités están funcionando satisfactoriamente y serán mantenidos.

Ley orgánica

El representante de China observó con satisfacción que antes de 1960 o en dicho año se promulgaría la legislación orgánica para el Territorio. Respecto a este punto, estaba de acuerdo en que debía consultarse a la población local como estaba tratando de hacerlo la Autoridad Administradora.

Organización judicial

El representante de Bélgica declaró que, aunque estaba persuadido de que la codificación de las costumbres precisaría indudablemente un poco más la regla o principio en vigor, le parecía a la vez muy posible que una codificación pudiese entorpecer la necesaria evolución de la costumbre e impedir sus progresos.

El representante de Australia felicitó a la Autoridad Administradora por el hecho de que casi todos los puestos judiciales del Territorio, incluso todos los de jueces de distrito y comunales, estaban confiados a miembros de la población autóctona. Tomó nota con interés de que se había nombrado un *public defender* micronesio para cada distrito, y que pronto se celebraría una reunión de diez días de todos estos *public defenders*. Demostró interés por saber a su debido tiempo en qué forma funcionaría este sistema.

El representante de Siria indicó que compartía las opiniones del representante de Bélgica con respecto a la codificación del derecho consuetudinario autóctono y opinaba que tal medida tendría efectos desfavorables y perturbaría la evolución progresiva de la sociedad autóctona.

III. PROGRESO ECONÓMICO

Reseña de las condiciones en el Territorio y recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

Información general

La Autoridad Administradora describe la vida económica del Territorio como una obra que realiza principalmente la familia, en la que cada miembro contribuye con bienes y servicios a la familia y al clan. Estos recursos se complementan con algunos alimentos, productos secundarios no esenciales y bienes duraderos que proceden del mundo exterior y que se pagan con los ingresos resultantes de la venta de copra y de algunos otros productos. La Autoridad Administradora no considera al ingreso en dinero como una medida de importancia en lo relativo al nivel de vida, producción o bienestar. Una pequeña parte de la población en-

cuentra empleo regular remunerado sólo en los centros de población no autóctona, fenómeno no común en el Territorio en general.

La Misión Visitadora comprobó la falta de recursos de valor en el Territorio y declaró que aunque estos recursos existiesen, el aislamiento en que se encontraba el Territorio con respecto a los mercados mundiales y su dispersión geográfica constituían obstáculos formidables al desarrollo. Consideraba que la agricultura seguiría siendo la principal actividad económica del Territorio y que sólo se podría lograr mayor progreso desarrollándola.

Fuera de los productos agrícolas, los únicos otros recursos de importancia del Territorio eran los depósitos de fosfatos, que se agotarían pronto, y las pesquerías que hasta ahora no habían tenido éxito comercial, si bien se estaban estudiando los medios de desarrollarlas. La Autoridad Administradora declaraba empero, que parecían existir recursos potenciales con que proporcionar adecuada subsistencia a los habitantes autóctonos. Su actual política económica consistía en desarrollar la eficacia de las organizaciones comerciales locales, preparar grupos autóctonos para que se hicieran cargo de la explotación comercial de la copra tan pronto como fuera posible, mejorar los actuales cultivos de subsistencia y comerciales, introducir nuevos cultivos y mejorar la pesquería autóctona.

En su 12º período de sesiones, el Consejo tomó nota de que el informe de la Misión Visitadora confirmaba su impresión anterior sobre la relativa escasez de recursos naturales y de potencial económico general del Territorio, y apoyó la opinión de la Misión de que debía dedicarse atención primordial al desarrollo y mejoramiento de la producción agrícola.

La Autoridad Administradora se dedicaba a diversas actividades relacionadas con política y planificación económicas. Además de un experto en economía y de un auxiliar destacado en la sede, se cuenta con personal agrónomo en el terreno. El Departamento de asuntos económicos que está encargado de la dirección técnica del programa correspondiente, realiza estudios sobre el potencial económico del Territorio. Durante el año que se examina en este documento, se formó un Comité de desarrollo económico para que estudiase los problemas económicos, planificara, desarrollase y recomendase al Economic, Conservation and Welfare Board programas encaminados a fomentar el progreso y la independencia económicos del Territorio. Al Comité incumbe también la administración, funcionamiento y dirección técnicos de los proyectos. En cada distrito administrativo el servicio de asuntos insulares está encargado de dar a conocer los resultados de las investigaciones a la población y de estimular nuevas técnicas agrícolas en lo relativo a la horticultura y ganadería. Los servicios de educación contribuyen también a los programas de desarrollo exponiendo ante los estudiantes las técnicas agrícolas y las prácticas comerciales. La Island Trading Company de Micronesia estimula las empresas comerciales locales y las prepara para que se encarguen de la importación y exportación de mercaderías y de copra.

En su 14º período de sesiones, el Consejo adoptó la siguiente recomendación:

El Consejo, tomando nota de la declaración de la Autoridad Administradora de que el principal problema del Territorio es el desarrollo de una economía

independiente que asegure un razonable nivel de vida, y, tomando nota también de que se están haciendo ensayos con respecto a la producción de cacao y café, a la crianza de ganado y a las pesquerías, expresa la confianza de que la Autoridad Administradora hará todo lo posible por seguir ampliando y diversificando la economía con arreglo a un plan de desarrollo económico general.

Agricultura

La agricultura, que es la principal actividad económica del Territorio, consiste en la producción de una diversidad de cultivos de subsistencia y de copra, cultivo comercial que es la principal exportación y base de la economía del Territorio. La Autoridad Administradora informa que la industria de la copra se encuentra actualmente en el nivel de la preguerra en la mayor parte de las zonas, y que se puede incrementar a condición de que se deje mayor espacio en las plantaciones de árboles y que se mejoren los servicios de transporte y almacenamiento de copra. Durante el año que se examina un experto de la Comisión del Pacífico Meridional hizo un estudio sobre las plantaciones de coco en varios distritos. Sus consejos fueron bien recibidos por la población autóctona de esas regiones y se preparan folletos sobre el cultivo de cocoteros para divulgarlos ampliamente en las lenguas autóctonas. En Yap, Palay y Ponape se realizan trabajos experimentales sobre el cacao, que permiten considerar a este producto como un segundo cultivo comercial para el Territorio; y en el distrito de Saipán se trata de restablecer la producción de café.

La Autoridad Administradora indica en su informe anual que es difícil precisar el progreso en materia de agricultura, pues no se han hecho estudios completos sobre esta materia, y el adelanto es necesariamente lento, pues cada mejora que se hace debe adoptarla un gran número de agricultores que se ocupan en cultivos de subsistencia. La economía y la extensión de tierra disponible no permiten un desarrollo en gran escala, y no existe el propósito de modificar radicalmente métodos tradicionales que han demostrado ser beneficiosos para los habitantes.

Uno de los objetivos a largo plazo del actual programa agrícola es la formación de agentes agrícolas micronesios. En todos los distritos se da formación profesional a auxiliares autóctonos. Las estaciones agrícolas experimentales de Ponape y Saipán realizaron en el curso del año trabajos relacionados con el mejoramiento de cultivos y la introducción de otros nuevos, lucha contra la erosión, riego y reforestación.

La Misión Visitadora expresó su agrado por el acertado programa agrícola descrito en informes anuales anteriores, pero estimaba que sólo respondían a un mínimo de las necesidades. Insistió en que se creara un programa coordinado y a largo plazo de desarrollo agrícola, y en mayor escala que el programa actual, y propuso que se previese la posibilidad de crear un departamento separado de agricultura. En el programa podría figurar un estudio sobre aprovechamiento de la tierra, conservación del suelo y reforestación, mejoramiento de la agricultura mediante el fomento de la fertilización y la introducción de nuevas plantas, incremento de la investigación en materia de selección de plantas y de cría de nuevas clases de ganado, y la continuación del actual programa de enseñanza, incluso la capacitación de mi-

cronesios como auxiliares de los agrónomos de distrito.

En su 12º período de sesiones, el Consejo, después de reconocer la importancia primordial de la agricultura en la economía del Territorio, y tomando nota de las sugerencias de la Misión Visitadora en apoyo de que se intensifiquen los esfuerzos en esta materia, acogió con agrado la reciente creación de una división agrícola en el Territorio, realizada por la Autoridad Administradora, y el término de los planes para un programa agrícola a largo plazo, considerándolo como una garantía de los nuevos esfuerzos que se harán en este sentido.

En su informe anual para 1953, al referirse la Autoridad Administradora a la sugerencia de que el Gobierno del Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico organice un departamento separado de agricultura, declara que el agrónomo principal del Territorio está destacado en el terreno y tiene a su cargo un vasto programa de actividades con respecto al desarrollo agrícola. La reorganización efectuada el 30 de junio de 1953 creará una división agrícola de acuerdo con el programa económico del Territorio, y se cree que de esta manera se hará frente a las actuales necesidades. Durante el ejercicio económico de 1953 el Gobierno del Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico empleó siete agrónomos de distrito y cuatro agrónomos de la región.

En su 14º período de sesiones, el Consejo adoptó la siguiente recomendación:

En vista del rápido crecimiento de la población y de la limitada extensión de tierra disponible para fines agrícolas, el Consejo recomienda a la Autoridad Administradora que siga buscando métodos y medios de aumentar la productividad de la tierra, introduciendo métodos de cultivos más intensivos, generalizando el régimen de explotación agrícola familiar y mediante otros medios apropiados.

Comercio

El valor de las exportaciones totales del Territorio bajó de 1.750.162 dólares en 1952 a 1.235.700 dólares en 1953; y las importaciones aumentaron de 1.848.885 dólares a 2.171.400 dólares. La Autoridad Administradora informó al Consejo que la aparente disminución en el valor de las exportaciones se debía a un cambio en el método de evaluar las exportaciones de fosfato. El valor de los principales productos básicos exportados durante los dos últimos ejercicios económicos fue el siguiente:

	1952	1953
	(En dólares de los EE.UU.)	
Copra	1.100.000	879.300
Fosfato	500.000	140.300
Trocos ^a	80.000	164.500

^a Troco: molusco gasterópodo de la familia de los tróquidos.

A fin de mantener un precio de compra estable para la copra, la Autoridad Administradora designó como únicos exportadores de copra a la Island Trading Company y a la Northern Marianas Development Company. Cuando los precios de la copra están altos estas compañías exportadoras depositan parte de sus utilidades en fondos de estabilización que tienen por fin mantener los precios de la copra cuando el mercado mundial baja. En 1953, los pagos al fondo de estabilización as-

cendieron a 178.507 dólares y 21.117 dólares respectivamente. El precio de compra por tonelada en los diversos grados de copra durante el año que se examina osciló entre 50 y 70 dólares en 1952 y 70 y 90 dólares en 1953. El precio de venta de la copra durante este mismo período fluctuó entre 128 y 223,16 dólares por tonelada.

La Island Trading Company de Micronesia se ocupó de todas las operaciones de exportación de copra, trocos y productos de artesanía durante el ejercicio económico de 1953. Esta compañía ha sido la principal exportadora, importadora y compradora dentro del Territorio en fideicomiso desde que éste se creó en 1947. Conforme a una directiva encaminada a liquidarla en 1953, la compañía adoptó una política de liquidación y de reducción de su campo de actividades. Sin embargo, continuó importando artículos comerciales, exportando productos de la isla y ayudando a las firmas autóctonas de venta al por mayor. En el nuevo año que se le ha concedido para liquidar sus actividades se ocupará en crear empresas de propiedad de los autóctonos y prepararles para hacerse cargo de las operaciones de importación y exportación de la compañía. La Autoridad Administradora espera que con esta nueva experiencia podrán más fácilmente desarrollar un programa de intercambios comerciales. La Autoridad Administradora declara que la actual política económica tiene por fin acrecentar la eficiencia de las organizaciones comerciales locales y preparar grupos indígenas que asuman la explotación del comercio de la copra tan pronto como sea posible y para lo cual se realizan planes encaminados a concertar un arreglo comercial conveniente.

En su 12º período de sesiones, el Consejo, tomando nota de la importancia que la Misión Visitadora atribuía a las actividades de la Island Trading Company con respecto no sólo al comercio de exportación e importación, sino también a otras actividades económicas de gran utilidad para la población autóctona, y considerando que las actuales organizaciones económicas autóctonas no estaban aún convenientemente equipadas para asumir las responsabilidades de la compañía, compartía la preocupación expresada por la Misión Visitadora ante la perspectiva de una próxima liquidación de la compañía. El Consejo acogió con agrado el nuevo estudio que estaba haciendo la Autoridad Administradora con respecto a la prolongación temporal de la vida de la compañía y la seguridad dada por la Autoridad Administradora de que el financiamiento y control de las actividades generales de desarrollo económico emprendidas previamente por la compañía habían sido transferidas al gobierno territorial, y que se podría mantener el sistema de estabilización de precios de la copra por otros medios. Recomendó que la Autoridad Administradora siguiese cooperando en el desarrollo de las empresas comerciales autóctonas a fin de que pudieran asumir las funciones de la compañía en lo relativo al aspecto comercial.

En su informe anual para 1953, la Autoridad Administradora declaró que se insistía en que la continuación de la Island Trading Company era necesaria para el equilibrio de la economía micronesia. Aunque el Congreso de los Estados Unidos había fijado antes la fecha de liquidación de la compañía al 31 de diciembre de 1953, había extendido la vida de ésta por un nuevo año. Durante ese tiempo se estudiaría la forma de reemplazar los servicios de la compañía, principal-

mente mediante las actividades de los micronesios mismos más bien que mediante compañías extranjeras, a fin de que la población del Territorio en fideicomiso pueda aprovechar la mayor cantidad posible de ingreso monetario.

La Autoridad Administradora informó al Consejo en su 14º período de sesiones que la Island Trading Company estaba satisfecha con sus esfuerzos encaminados a crear compañías micronesias que la reemplazarán. A fines de 1954 podrá una compañía en cada distrito asumir de manera satisfactoria las responsabilidades comerciales relativas a la compra de copra y de mercaderías; algunas compañías se ocupan ya también de otros asuntos.

En su 14º período de sesiones, el Consejo adoptó la siguiente recomendación:

El Consejo toma nota de la declaración de la Autoridad Administradora de que las compañías autóctonas se han desarrollado hasta tal punto que pueden ya hacerse cargo del trabajo de la Island Trading Company. Considerando que la venta de copra en el mercado mundial presenta dificultades especiales, el Consejo acogió con agrado el hecho de que se han tomado medidas para que continúe en actividad el Copra Stabilization Fund (fondo de estabilización de la copra) y espera que la Autoridad Administradora se asegurará de que las sociedades autóctonas reciban la asistencia que necesitan en la comercialización de la copra, la distribución de productos comerciales y cualesquiera otras actividades pertinentes.

Cuestiones relativas a la propiedad agrícola.

De una superficie total de 687 millas cuadradas de tierras, la población autóctona poseía en 1951 una superficie calculada en 250 millas cuadradas, y las tierras fiscales, incluso las tierras utilizadas por la Administración, abarcaban 434 millas cuadradas. La Autoridad Administradora declara que los problemas que más comúnmente se comentan entre la población autóctona se refieren a la larga tramitación de la devolución de las tierras expropiadas durante la guerra y a la solución de las reclamaciones por daños ocasionados durante ese mismo período. La Autoridad Administradora confía en que los cambios operados dentro de la estructura de la Administración durante el año pasado, acelerarán la solución de tales problemas. Gran parte de la tierra se devolverá a sus propietarios primitivos con el fin de remediar injusticias, o se distribuirán nuevamente entre nuevos propietarios de acuerdo con la ley de propiedad agrícola familiar. Otras partes de las tierras fiscales se reservarán para los futuros aumentos de población, y algunas regiones se conservarán como dominio público como medidas de conservación o para crear nuevos recursos para el Territorio. En general los habitantes desean la devolución de las tierras a los antiguos dueños pero reconocen la legitimidad de transferencias de títulos hechas anteriormente y en muchos casos las observan gustosos. La población indígena planteó diferentes problemas agrarios ante las Misiones Visitadoras de 1950 y de 1953.

En su 12º período de sesiones el Consejo recordó que había previamente insistido en que se resolvieran pronto las diversas reclamaciones sobre tierras formuladas en el Territorio, y tomó nota de la impresión recogida por la Misión Visitadora de que el retraso en resolver tales reclamaciones era motivo de preocupación para

los habitantes. Reconoció las dificultades intrínsecas del problema y comprobó con satisfacción que la Autoridad Administradora había determinado ya las normas apropiadas para responder a los intereses del Territorio. Insistió en que la Autoridad Administradora se apresurara a resolver las reclamaciones, ajustándose a una sana política de aprovechamiento de las tierras y, con este propósito, explicase su política agrícola a los habitantes y asociase a representantes autóctonos a la aplicación de esta política.

En su informe anual para 1953 la Autoridad Administradora declaró que se había concedido alta prioridad a la cuestión de reclamaciones sobre tierras en el curso del ejercicio económico anterior. Señaló que el problema de las tierras se concentraba en torno a los tres puntos principales siguientes: reclamaciones relativas a tierras enajenadas por los japoneses e incorporadas al dominio público; indemnizaciones por el uso o por la deterioración de tierras como consecuencia de actividades bélicas; y utilización de algunas tierras para instalaciones administrativas ordinarias del Territorio en fideicomiso. La División of Land Titles and Claims del Territorio en fideicomiso ha realizado un trabajo considerable con respecto a reclamaciones sobre tierras, y se confía en que podrá terminar el trabajo en ese distrito a fines de 1954. Estas actividades se están ahora extendiendo a otros distritos. Las dificultades se deben a que muchos documentos catastrales y jalones fronterizos fueron destruidos durante la guerra. Era necesario además traducir los registros agrícolas existentes de la lengua japonesa a la lengua autóctona. Se anunció además que a aquellos isleños que actualmente poseen permisos revocables para el cultivo de tierras de dominio público y que no reivindiquen la propiedad de tierras particulares, se les otorgará la oportunidad de guardar en forma permanente como propiedad agrícola familiar el dominio público que cultivan al presente.

La Autoridad Administradora estudia actualmente la segunda categoría de reclamaciones planteadas principalmente a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y relativas al uso de tierras privadas o públicas por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

Se estudia también la tercera categoría de reclamaciones, originadas por el uso que hace de tierras públicas la Administración del Territorio en fideicomiso. En las Islas Marshall, se ha debatido durante algunos meses el asunto con los propietarios de las tierras ocupadas por la sede del distrito.

En su 14º período de sesiones, el Consejo adoptó la siguiente recomendación:

El Consejo, tomando nota de las medidas adoptadas por la Autoridad Administradora para apresurar la solución de las reclamaciones agrícolas, así como la creación de oficinas agrícolas en cada distrito y de juntas consultivas agrícolas compuestas de representantes autóctonos, y recordando la recomendación formulada en el 12º período de sesiones, insta a la Autoridad Administradora a que se apresure de nuevo a resolver tales reclamaciones por todos los medios posibles, incluso reforzando el personal de los grupos investigadores.

Recursos minerales

Los recursos minerales son pocos y el único que se explota, que es el más importante y más ampliamente difundido es el fosfato (rocas fosfatadas). Se cree que

este depósito, que explota una compañía japonesa en Angaur, en el distrito de Palaos, es el único yacimiento minero comercialmente aprovechable por ahora y que se agotará dentro de un período de uno a tres años. La compañía paga un derecho de extracción de dos dólares por tonelada a la Angaur Mining Trust Fund en beneficio de la población de Angaur, lo cual equivale a una renta perpetua de 15.000 dólares anuales para la población de esta comunidad. La compañía hace otros pagos tales como los de arriendos de tierra a la población indígena y abona al Gobierno del Territorio un impuesto de transformación de un 15% sobre el valor del mineral extraído. En el curso del año que se estudia, se exportaron 70.160 toneladas de fosfato, que produjeron un impuesto de transformación de 109.313 dólares. Con los derechos de extracción equivalentes a un total de 140.309,61 dólares, pagados a la Angaur Mining Trust Fund, el activo de este fondo se elevó a 777.876,71 dólares.

Pesquerías

Según la Autoridad Administradora, hasta ahora no han tenido éxito las tentativas de establecer la industria pesquera en una escala comercialmente exportable; sin embargo, se estudian otros medios. Actualmente, se realiza una pesca de subsistencia para satisfacer las necesidades de los centros de distrito.

Transportes

Las comunicaciones aéreas entre Guam y los centros de distrito, con excepción de Saipán, las asegura una compañía comercial que dispone de una flota de tres aviones anfíbios pertenecientes al Gobierno. En Saipán el transporte aéreo lo asegura el servicio militar de transporte aéreo.

Dos buques con capacidad para 4.800 toneladas de carga aseguran el transporte por mar entre los centros de distrito, Guam y otros puertos. Además, tres buques de 250 toneladas de capacidad, una goleta auxiliar y un remolcador prestan servicios entre los centros de distrito. Los buques, que pertenecen a la Administración, son usados por la Pacific Micronesia Lines, en virtud de un contrato.

En su informe anual de 1952 la Autoridad Administradora declaró que la experiencia había demostrado que se necesitaba introducir algunos cambios en los servicios de transporte y que se estaban tomando medidas en este sentido. En aquella época el transporte estaba asegurado por un buque con una capacidad aproximada de 4.800 toneladas y otros seis de 250 toneladas de capacidad cada uno. Se informó a la Misión Visitadora que la modificación principal que se proyectaba, además de agregar un segundo buque de 4.800 toneladas de capacidad, era reemplazar las actuales motonaves de servicio en los distritos por seis goletas auxiliares, las cuales por diversas razones, además de la adición del segundo vapor, permitiría duplicar las actuales visitas administrativas y de comercio a las islas adyacentes —que antes se visitaban cada tres meses— a un costo equivalente a menos del 50% del valor de las motonaves y que se podrían ulteriormente dotar de tripulación casi totalmente micronesia. La Administración confiaba también en que se podría conseguir que las embarcaciones comerciales hicieran regularmente escalas en el Territorio, lo cual permitiría evitar una gran parte de los gastos elevados de transbordo en

Guam. La Misión Visitadora señaló que, por razones de seguridad, la navegación comercial sólo se autorizaba bajo bandera de los Estados Unidos, lo cual era una desventaja.

En su 12º período de sesiones, el Consejo, después de comprobar que la Misión Visitadora nacía resaltar tanto las grandes dificultades como la importancia fundamental que tenía el problema de proporcionar medios de transportes y comunicaciones convenientes en el Territorio, elogió a la Autoridad Administradora por la decisión con que había abordado este problema, según lo demostraban los planes que estaban actualmente en vías de ejecución, y opinó que para llegar a resolver satisfactoriamente el problema sólo se necesitaba ahora destinar una cantidad suficiente de goletas para los servicios entre los distritos.

En su 14º período de sesiones, el Consejo aprobó la siguiente recomendación:

El Consejo toma nota de que la Autoridad Administradora está proporcionando buques y tomando otras medidas encaminadas a asegurar un servicio adecuado de transporte para el Territorio, y que este servicio seguirá necesitando un subsidio. El Consejo expresa la confianza de que la Autoridad Administradora seguirá prestando la asistencia necesaria y le pide que en su próximo informe dé a conocer las medidas que se están adoptando para resolver este difícil problema.

Hacienda pública

Como en todos los años anteriores, el Territorio en fideicomiso estuvo muy lejos de poder costear los gastos públicos mediante ingresos públicos locales en el ejercicio económico 1952-1953, y tuvo que contar con ayuda importante de la Autoridad Administradora, facilitada en forma de créditos presupuestarios para cubrir los gastos administrativos.

En su 12º período de sesiones, el Consejo expresó la confianza de que se seguirían proporcionando suficientes créditos presupuestarios para la administración y desarrollo del Territorio, a fin de mantener los actuales servicios públicos, principalmente los relativos a enseñanza.

Los fondos locales ascendieron a 602.241 dólares en 1952, a 1.339.512 en 1953 y se calcula que alcanzarán la suma de 1.307.500 dólares en 1954. Los gastos ascendieron a 5.504.663 dólares en 1952, a 6.929.178 en 1953 y se calcula que alcanzarán la cifra de 5.607.500 dólares en 1954. Además, para Saipán se calculó un ingreso especial de 60.408 dólares para 1953, y otro calculado en 111.550 dólares para 1954. Los gastos especiales de este mismo distrito ascendieron a 625.341 dólares en 1953 y se calcula que ascenderán a 1.150.000 dólares en 1954.

La mayor parte del ingreso local, que en 1953 ascendió a 741.910 dólares, procede de ingresos por concepto de carga y pasajeros. El saldo corresponde a impuesto de transformación de la copra, impuestos sobre importaciones y exportaciones, derechos, contribuciones y otras recaudaciones. Además de los impuestos percibidos por el Gobierno del Territorio en fideicomiso, los gobiernos locales perciben impuestos y recaudan derechos para pagar a los funcionarios, mantener los edificios municipales y los servicios de comunicaciones.

En su 14º período de sesiones, el Consejo adoptó la recomendación siguiente:

El Consejo toma nota de que se ha hecho progreso en el desarrollo del Territorio, pero que, debido a diversos factores, entre los cuales figura la disminución en la asignación de fondos, el progreso en algunos campos no ha sido tan rápido como se esperaba. En vista de la necesidad de fondos para realizar los planes encaminados a alcanzar la independencia económica del Territorio, el Consejo invita a la Autoridad Administradora a tratar de encontrar los métodos y medios de aumentar las sumas que se asignan para el desarrollo del Territorio.

Haberes, cuentas de ahorro postal y bonos japoneses

En el pasado los habitantes autóctonos formularon peticiones a las Misiones Visitadoras para que se les reembolsaran los haberes en metálico, las cuentas de ahorro postal y los bonos japoneses que tenían en su poder.

En su 12º período de sesiones, el Consejo tomó nota de que el retardo en reembolsar los haberes en metálico, las cuentas de ahorro postal y los bonos japoneses constituía un principio de descontento para la población autóctona, y apoyó la moción de la Misión Visitadora de que aunque la Autoridad Administradora no era legalmente responsable ante tales reclamaciones, debía tomarse una medida definitiva al respecto y adoptarla lo antes posible. Tomó nota de que la Autoridad Administradora estaba estudiando las clases de reclamaciones que podrían incluirse en algunos arreglos especiales que se concertarían con el Japón de acuerdo con las disposiciones del Tratado de Paz, y la invitó a que en su próximo informe anual diese cuenta de los nuevos progresos realizados en esta materia.

La Autoridad Administradora recordó, en su informe anual para 1953, que el párrafo a) del artículo 4 del Tratado de Paz con el Japón disponía entre otras cosas que las reclamaciones de los residentes y de las Autoridades Administradoras de ciertas regiones, incluso el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, formuladas contra el Japón y sus nacionales, debían ser objeto de acuerdos especiales entre el Japón y tales autoridades. La Autoridad Administradora declaró que estaba actualmente ocupada en estudiar el tipo de reclamaciones que pudiesen incluirse en los arreglos especiales que deberían negociarse con el Japón, en nombre de los residentes del Territorio en fideicomiso.

La Autoridad Administradora declaró además que se daba cuenta de la difícil situación producida por la redención parcial de haberes en yens hecha por las autoridades militares inmediatamente después de la guerra. Se estaba también estudiando este asunto y se confiaba en que se encontraría una solución satisfactoria para el problema que lógicamente interesaba a la población del Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico.

En su 14º período de sesiones, el Consejo se informó que la Autoridad Administradora confiaba en que podría pronto resolver con equidad muchas de las reclamaciones todavía pendientes. En el distrito de Saipán se había comenzado ya el arreglo de las reclamaciones relativas a los haberes en yens no rescatados. Varios obstáculos habían retardado el completo arreglo de las reclamaciones, pero la Autoridad Administradora considera que se había progresado en estas gestiones.

En su 14º período de sesiones, el Consejo adoptó la recomendación siguiente:

El Consejo toma nota de que la Autoridad Administradora espera atender a las reclamaciones de la población autóctona sobre el reembolso de los haberes japoneses, e invita a la Autoridad Administradora a intensificar sus esfuerzos para lograr una solución sobre las reclamaciones relativas a cuentas de ahorro postal y bonos japoneses.

Observaciones de los miembros del Consejo, hechas a título personal únicamente

Consideraciones generales

El representante de Francia declaró que en el terreno económico la situación no era demasiado angustiosa, pero que no daba tampoco margen a optimismo. Expresó que no obstante los esfuerzos sistemáticos hechos por la Administración, llegaría el día en que sería necesaria la inmigración debido a la presión demográfica resultante del progreso realizado en el campo de la salud pública. Aunque está convencido de que no es fácil prever mejoramiento alguno en la situación agrícola, considera que la política de la Administración de combatir los parásitos y seleccionar los cultivos más resistentes parece acertada. Propone que se estudie la posibilidad de producir aceite y harina de pescado, así como fertilizantes. Cree que la creación de una pequeña flota indígena de goletas ofrecería la posibilidad de emplear a un determinado sector de la población y se podría asegurar así el transporte. Respecto a este punto lamenta que haya cesado de funcionar la Island Trading Company. Se enteró con agrado de que se habían creado algunas compañías autóctonas con ayuda de la Administración y que dispondrían de productos. Señaló, sin embargo, que la Island Trading Company tenía otra función que había desempeñado con todo acierto; mediante sus utilidades se habían financiado algunas muy útiles empresas para la población autóctona. Con esas utilidades se hubiera podido crear la pequeña flota que acaba de mencionar. Sería muy difícil para la Autoridad Administradora obrar con la flexibilidad con que lo hacía la Island Trading Company. Para terminar expresó la confianza de que se aprobarían las peticiones de fondos que debía presentar el Alto Comisionado y que no sería necesario aplicar reducciones considerables en las diversas regiones como se había hecho durante el año que se estaba examinando.

El representante de Australia apoyó en general la política económica ideada para el Territorio, el mantenimiento del uso exclusivo para los micronesios de los recursos naturales de la región en la medida que correspondía con su capacidad para desarrollar la eficacia de las organizaciones comerciales locales, y la preparación de grupos autóctonos que se encarguen de la explotación del comercio de la copra tan pronto como sea posible.

El representante de China tomó nota con satisfacción de las diversas medidas adoptadas por la Administración para aumentar la producción local, principalmente aquellas encaminadas a mejorar las plantaciones de cocoteros, a fomentar el cultivo del cacao y del café y a desarrollar las pesquerías. Considera que la multiplicación de los recursos autóctonos reviste singular importancia en vista de las declaraciones del representante especial con respecto al aumento de la población.

El representante de El Salvador declaró que, para reforzar la autonomía financiera de la Administración

y satisfacer las necesidades de la población habría que implantar métodos agrícolas modernos, y que estaba convencido de que la Autoridad Administradora seguiría proporcionando generosamente asesoramiento técnico, equipo y recursos.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señaló que la población autóctona del Territorio vivía en difíciles condiciones con una economía de subsistencia de carácter primitivo que los condenaba a casi hambre perpetua.

Agricultura

El representante de India declaró que aunque advertía que el informe anual se refería a estaciones experimentales, al mejoramiento de las plantas y del ganado, a la rotación de cultivos, a la lucha contra la erosión y a la reforestación, el nivel general de desarrollo agrícola no demostraba el grado de notorio mejoramiento que podría suponerse de la consideración de tales proyectos.

El representante del Reino Unido elogió los trabajos de mejoramiento e investigación agrícola de que se había informado al Consejo.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que la Autoridad Administradora no se interesaba en asegurar el progreso económico de la población. Añadió que no ayudaba a ésta a conseguir herramientas modernas ni les enseñaba los métodos modernos de agricultura ya que se seguían usando todavía estacas y cuchillos como principales instrumentos agrícolas.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que ésta se proponía continuar su investigación sobre cultivos nuevos y perfeccionados que incrementen el comercio y los ingresos monetarios de la región. Empero, dicho programa no es de aquellos en los cuales se pueden lograr en corto tiempo resultados espectaculares, pues a la experimentación necesaria para determinar los cultivos adecuados deben seguir pruebas encaminadas a descubrir las especies y variedades más convenientes, y algunos cultivos necesitan varios años antes de llegar a plena madurez. En algunas regiones se podrían establecer con éxito cultivos de producción rápida, por ejemplo de legumbres, de las cuales se están ya vendiendo cantidades considerables en Guam.

La Autoridad Administradora está impulsando su programa agrícola tanto técnico como experimental, mediante agentes de divulgación agrícola. Sin embargo, se necesitó persuasión y demostración para convencer a muchos microneses de la utilidad de adoptar métodos científicos.

Con respecto al empleo de equipo moderno, los utensilios agrícolas modernos sólo sirven en las muy limitadas zonas llanas de las islas altas. Para la mayor parte del Territorio dicho equipo sería inadecuado y en realidad peligroso, debido al declive del terreno, al poco espesor del suelo y al problema de la erosión. Además, las condiciones climáticas y otros aspectos originarían en los propietarios serios y costosos problemas de mantenimiento.

Comercio

El representante de Bélgica quedó sorprendido al saber que la Autoridad Administradora había decidido

que cesara de funcionar la Island Trading Company. Expresó la confianza de que se mantendría el fondo de estabilización de la copra aunque cesaran las actividades de la compañía.

El representante de China consideró que debía acogerse con agrado la transferencia de las funciones de la Island Trading Company a la población micronesia misma.

Con respecto a la comercialización de la copra el representante especial de la Autoridad Administradora aseguró a los miembros del Consejo que la Autoridad se proponía mantener la junta y el fondo de estabilización de la copra. Declaró que esto sería factible sea cual fuere el nuevo sistema de comercialización de la copra que se pudiese en práctica. Empero, era obvio que las complejidades de la venta de la copra en el mercado mundial necesitaban de cierta ayuda exterior.

En lo relativo a la liquidación de la Island Trading Company, el representante especial de la Autoridad Administradora reconoció que se plantearían problemas en diversos puntos del Territorio, pero expresó la confianza de que las compañías micronesias locales afrontarían la situación y se desarrollarían rápidamente para poder hacerse cargo de la responsabilidad y oportunidad confiadas en ellas. El desarrollo de las compañías locales acarrearía como resultado una situación económica más sólida para todos los interesados.

Régimen agrario

El representante de India señaló a la atención la desproporción que existía entre la superficie de la tierra de que se había apropiado la Autoridad Administradora y la que quedaba a disposición de la población del Territorio. Refiriéndose a la medida de la Administración de devolver a la población autóctona, mediante permisos revocables, ciertas tierras arrebatadas por los japoneses, el representante de India afirmó que nada había tan perjudicial al desarrollo agrícola como la incertidumbre que acompañaba a dicho permiso. A propósito de esto señaló las dificultades que encontraba la Administración para determinar con exactitud las fronteras, y resolver el gran número de reclamaciones que se presentaban. Declaró sin embargo, que si bien la Administración había dado garantías a la Misión Visitadora de que estos permisos revocables se confirmarían en la mayoría de los casos, el agricultor dedicaría probablemente su trabajo a la tierra que realmente poseía en vez de depender de aquella que se le prometía. Confiaba en que esta situación se modificaría fundamentalmente antes de que el Consejo se ocupase de nuevo de este asunto.

El representante de Francia declaró que se necesitaría aún un esfuerzo más sostenido para resolver la cuestión agrícola, solución que se podría alcanzar reforzando el personal de los grupos investigadores.

El representante de Bélgica expresó la confianza de que se solucionaría rápidamente la cuestión controvertida e irritante relativa a los daños de guerra y reclamaciones agrícolas, solución que, a su juicio, sería indudablemente acogida con agrado por la población autóctona. Consideraba que la misma Autoridad Administradora debería de tratar de resolver este problema cuanto antes.

Con respecto al hecho de que la población aumentaba en este Territorio cuyos recursos en tierras eran muy limitados, consideraba que la población autóctona

tendría que buscar en la emigración la solución del problema de exceso de población. Manifestó también que la creación de una escuela profesional, que capacitase convenientemente a la población autóctona en materia de artesanía, podría permitirles ganarse la vida en otra parte.

El representante de Siria expresó la confianza de que pronto se encontraría una rápida solución al problema de reclamaciones agrícolas, daños de guerra, ahorro postal y pago de yens. Declaró que ya era hora de que estos problemas se resolviesen en forma conveniente y definitiva.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dijo que de la reducida tierra disponible, que aproximadamente abarcaba 680 millas cuadradas, sólo 250 estaban en manos de la población autóctona. En consecuencia, se había arrebatado a la población el 63% de las tierras. Aunque aquella iba creciendo, se le estaba disminuyendo la tierra de que era dueña y en la cual vivía. En consecuencia, las declaraciones del representante de los Estados Unidos y de otros representantes eran falsas cuando se referían al desarrollo y al progreso en la economía del Territorio, y cuando afirmaban que se estaba elevando el nivel de vida, pues si se había arrebatado el 63% de la tierra a la población autóctona ésta tenía menos medios de vida y su nivel de existencia era más bajo.

En muchas peticiones y reclamaciones la población autóctona ha pedido que se le devuelvan esas tierras, pues la agricultura es la única fuente de ingresos o de subsistencia. La población de las Islas Marshall había escrito una petición declarando que la tierra significaba mucho para ellos y que no tenían otro medio con qué vivir, que si se les quitaba la tierra ya para ellos no significaba nada seguir existiendo. La Misión Visitadora que estuvo en el Territorio, declaró que había recibido 1.080 peticiones en que se pedía la devolución de las tierras enajenadas a la población. Casi cada familia de las islas había sido afectada en una u otra forma por dicha enajenación, pero las numerosas peticiones de la población autóctona no habían sido atendidas por la Autoridad Administradora, la cual, de acuerdo con las líneas generales de su política, enajenó en forma arbitraria la tierra cada vez que encontró en alguna parte del Territorio una superficie adecuada para diversos fines militares, incluso el ensayo de armas atómicas y de hidrógeno y el establecimiento de instalaciones y bases militares. Con esto, expulsó por la fuerza a los habitantes de las islas, haciendo caso omiso de las necesidades, intereses y deseos de la población autóctona.

Añadió que el Consejo de Administración Fiduciaria debería recomendar que la Autoridad Administradora tomase las medidas necesarias para devolver a la población autóctona las tierras enajenadas e impedir en lo por venir toda enajenación de tierras pertenecientes a la población autóctona, bajo cualquiera forma o pretexto.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que la cuestión de reclamaciones de tierras había sido uno de los problemas considerado de mayor importancia, al asumir su puesto un año y medio antes. Aunque el trabajo en este respecto se había concentrado anteriormente en Saipán, existían actualmente oficinas agrarias en cada distrito, así como juntas consultivas compuestas de micronesios. Sin embargo, no podía prometer una solución rápida del problema, pues la falta de documentos catastrales adecuados

y de límites hacía que se tuviese que emplear esfuerzo considerable en trabajos de medición e investigación para poder llegar a una solución justa y duradera. Empero, podía asegurar al representante de la India, que con razón señaló el efecto desalentador que tenían en la agricultura los permisos revocables, que a fines de este año se tomarían medidas adecuadas con respecto a todos los títulos de propiedad agrícola en Saipán. Con respecto a la declaración del representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de que se habían presentado 1.080 quejas con respecto a reivindicaciones agrícolas, el representante especial señaló una importante diferencia según la cual se trataba, no de quejas formuladas a la Misión Visitadora, sino del número de reclamaciones que, según una notificación de la Administración a la Misión Visitadora, estaban debidamente preparadas, clasificadas por especialistas agrónomos y listas para ser transmitidas a la Administración y para cuya solución ésta ya trabajaba.

En cuanto a las declaraciones sobre la extensión del dominio público, el representante especial declaró que la Administración no deseaba retener sino estrictamente la tierra que se requería para servicios administrativos, cuencas hidrográficas, reservas forestales, otras necesidades públicas similares y medidas de seguridad. Al resolver las reclamaciones de tierras y el mantenimiento del programa de propiedad familiar de la Administración, el dominio público disminuiría progresivamente. Mientras tanto, se proporcionaban tierras a todos los micronesios que las necesitasen.

Pesquerías

El representante de Australia, refiriéndose a las investigaciones sobre la posibilidad de desarrollar una industria pesquera, señaló el éxito logrado ya en lo relativo al consumo local. Elogió la atención que se estaba prestando a las expediciones experimentales de grupos pesqueros estadounidenses en la zona del Pacífico central, y confiaba en que los micronesios podrían adquirir experiencia participando en ellas cuanto les fuese posible.

El representante del Reino Unido elogió las mejoras realizadas y el trabajo de investigación pesquera sobre el que se había informado al Consejo.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que la pesquería comercial era todavía una actividad hasta cierto punto insuficientemente desarrollada en el Territorio, debido tanto a la falta de capital como de conocimientos especializados. La Autoridad Administradora estaba trabajando con la Federal Pacific Ocean Fisheries Investigation and Canalization para resolver este problema, y confiaba en que se podría concertar un acuerdo que permitiera disponer en el Territorio del capital y conocimientos necesarios, preparar también a los micronesios y hacerles participar en el programa que se formulará.

Transporte

El representante de Australia manifestó que estaba persuadido de que el problema de los transportes y comunicaciones tenía una importancia especial para el Territorio y era de gran consecuencia para el desarrollo de las islas en todos sus aspectos. Tomó nota de la declaración del representante especial según la cual, para que funcionasen de manera satisfactoria, los transportes deberían probablemente ser subvencionados du-

rante algún tiempo más; reconoció que tal era probablemente el caso, pero declaró que estaba convencido de que se haría todo lo posible para resolver el problema.

Hacienda pública

El representante de Bélgica apoyó la política seguida por la administración encaminada a reducir los gastos simplificando la estructura administrativa y tratando de aumentar los ingresos con el fin de llegar a cierta autonomía económica. Expresó sin embargo la opinión de que en numerosos campos se seguiría necesitando una intervención generosa por parte de la Autoridad Administradora si se quería asegurar a la población autóctona de las islas del Pacífico un nivel de vida comparable al que goza actualmente.

El representante de Siria declaró que no ignoraba que la Autoridad Administradora asignaba créditos muy superiores a los ingresos locales del Territorio; sin embargo, había observado que la asistencia financiera iba disminuyendo. En consideración a la situación económica difícil del Territorio, existía urgente necesidad de créditos para alentar planes de desarrollo de gran utilidad. Los gastos que se hacían eran en gran parte para mantener el personal y los medios de comunicación, y lo que quedaba apenas bastaba para aumentar —y muy lentamente— el bienestar material de la población. El representante de Siria consideró que era difícil ver cómo se podrían realizar oportunamente los planes y proyectos previstos por la Administración, para realizar en forma parcial su política, encaminada a asegurar la autonomía económica del Territorio, si no contaba con los créditos necesarios. El representante de Siria expresó que a su modo de ver esta evolución no debía ser ni radical ni súbita y no debía exceder las necesidades de la sociedad considerada ni trastornar sus valores fundamentales; sin embargo, declaró que no convenía diferir excesivamente los cambios que fuesen necesarios para mejorar la situación material de los habitantes del Territorio. Recomendó que se abordara resueltamente el problema de las modificaciones que había que hacer en el terreno económico. Era necesario que las poblaciones aprendiesen a apreciar las ventajas de la civilización moderna y convenía hacer serios esfuerzos que les permitieran beneficiarse por lo menos del mínimo de esas ventajas; había que tratar de llegar a un nivel de vida razonable. En muchos aspectos, la Autoridad Administradora se encaminaba ya hacia este objetivo. El representante de Siria expresó la esperanza de que se pondrían a disposición de la Administración los créditos que le permitieran alcanzar rápidamente su propósito.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas señaló que no obstante el hecho de que la gran mayoría de la población no disponía de ingresos monetarios, las autoridades locales percibían un impuesto de capitación. La mayor parte de los habitantes no estaba en condiciones de pagar ese impuesto y se veía en la obligación de pagar esta deuda mediante una parte de su trabajo o pagando en especie. Era evidente que tal régimen de tributación era enteramente injusto y que se debía modificar urgentemente. Este régimen impositivo debería reemplazarse por un régimen de impuesto progresivo sobre los ingresos, determinado según la capacidad de pago del contribuyente.

El representante de la Unión Soviética señaló también que la Autoridad Administradora estaba obligada

a destinar sumas considerables para reforzar el presupuesto de las Islas, pues si la instrucción pública y la salud pública se financiaban exclusivamente mediante los ingresos locales que proporcionaban las poblaciones en forma de impuestos, no se podría evidentemente alcanzar ningún progreso.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró, en respuesta al representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que el régimen fiscal era objeto de un detenido estudio y que, en oposición a la declaración según la cual se había producido un retroceso en este terreno, la verdad era que se habían hecho considerables progresos. Se había mejorado el régimen fiscal y las posibilidades de obtener créditos que permitieran a la administración local proseguir sus actividades. Ahora correspondía que las administraciones locales, gracias a un régimen fiscal que ellas mismas habían pedido y que la Autoridad Administradora había sancionado, hicieran frente a las exigencias financieras de sus propias actividades, en la medida en que lo permitiera la economía actual.

En respuesta a las observaciones del representante de Siria, el representante especial declaró que, en lo relativo a la disminución de la ayuda financiera, la política de la Autoridad Administradora, expuesta ya antes claramente, se inspiraba en la experiencia de las relaciones de su país con los indios de América, la cual demostraba que el hecho de haber ayudado a estas poblaciones les había quizás inducido, en ciertos casos, a que se considerasen protegidas y había creado en ellas una especie de sentimiento de dependencia. La Autoridad Administradora descaba inspirar a los micronesios el sentido de la responsabilidad y de la independencia, y los hechos demostraban que se había alcanzado ese resultado.

Haberes, cuentas postales de ahorro y bonos japoneses

El representante de India, refiriéndose a un estudio hecho sobre el Territorio por la Universidad de Harvard, expresó la opinión de que mientras el Gobierno de los Estados Unidos de América limitase la libertad de los micronesios en cualquiera forma que fuese y no compartiese con ellos más que las cargas del Territorio y no su activo, dicho Gobierno estaría obligado a asegurar el bienestar económico de los micronesios. Esta responsabilidad con respecto a los micronesios era aún más grave que la que le incumbía con respecto a sus propios ciudadanos, los cuales gozaban indiscutiblemente de una libertad de acción mucho mayor. Parecía que la Autoridad Administradora había adoptado esta actitud y que la población del Territorio, al pedirle que se pronunciase sobre las reivindicaciones relativas a los haberes, las cuentas postales de ahorro y los bonos japoneses, se limitaba a pedir que pusiera en práctica esa política.

IV. PROGRESO SOCIAL

Reseña de las condiciones del Territorio y de las recomendaciones adoptadas por el Consejo

Consideraciones generales

Según el informe anual, la Declaración de Derechos que figuraba en el Código del Territorio bajo fideicomiso, garantizaba a la población autóctona el pleno goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

La Autoridad Administradora señalaba que los programas que ya había elaborado para el desarrollo de la autonomía, la independencia económica, los servicios médicos y la enseñanza, contribuían todos a mejorar las condiciones sociales. Estos programas, así como las costumbres locales, aseguraban las garantías necesarias a la protección y a la seguridad sociales de los habitantes. Los lazos de parentesco complejos que existían en cada colectividad procuraban a cada individuo la ayuda que necesitaba. En general, la estructura de la sociedad autóctona aseguraba todos los servicios de protección y de seguridad social desempeñados por las instituciones competentes en otras sociedades. Sin embargo, en casos de desastre o de situación excepcional, la Administración utilizaba para los socorros un fondo social especial. Además, la Administración había contribuido con fondos y había formulado una solicitud de asistencia a la Comisión del Pacífico Meridional para instalar un centro común en Koror en el Distrito de Palaos, donde la rápida adopción de las costumbres de occidente y de la vida urbana por la colectividad había trastornado la organización social. La Autoridad Administradora indicaba que no había habido otros objetos de financiamiento y que hasta ahora no había motivo de adoptar un programa de servicios sociales, en el sentido corriente de la palabra.

El nivel de vida fluctuaba entre dos extremos, de una parte del Territorio a la otra. Ciertas personas viven principalmente de su salario y utilizan productos importados; otras subsisten casi completamente gracias a productos locales y los bienes comerciales no son más que un lujo para ellas. El ensayo hecho por la Administración de realizar una encuesta sobre el costo de la vida entre los empleados autóctonos no ha dado resultados satisfactorios, porque no ha sido posible atribuir valor monetario a muchos de los elementos de la vida local.

Mano de obra

La mano de obra autóctona que no trabaja para la Administración se emplea principalmente en la producción de copra y en los trabajos de artesanía. La Marina emplea un número reducido de personas en Kwajalein, y las empresas comerciales micronesias que comprenden varias firmas comerciales, un aserradero y una empresa de construcciones navales ocupan a 600 personas. La Administración, con un número aproximado de 1.500 empleados, es la que utiliza mayor número de brazos en el Territorio. Como existe la tendencia a tomar por norma los sueldos y condiciones de empleo de la Administración, ésta tiene por principio evitar la institución de un sistema de sueldos o condiciones de empleo que las empresas privadas no podrían asegurar a sus empleados y que harían imposible la competencia libre en el mercado del trabajo.

No se ha tomado ninguna medida para extender la aplicación de los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo en el Territorio, porque es muy difícil aplicar allí estos convenios. Aunque no estén prohibidos, los sindicatos no existen en el Territorio. La huelga sólo se prohíbe en los servicios de la Administración. En cada distrito existen consejos micronesios de trabajo, compuestos de empleados norteamericanos y micronesios, que examinan los problemas del trabajo y recomiendan a los administradores de distrito las medidas que hay que tomar. Los empleados pueden someter sus dificultades a estos con-

sejos. Además de las medidas legislativas, los micronesios y los otros empleados recomiendan proyectos de estatutos y reglamentos del trabajo. Los administradores de distrito, sus auxiliares y los miembros del servicio del personal son responsables de la administración y aplicación de las leyes y de los reglamentos del trabajo y cuidan de que se apliquen a todos los empleados en forma justa y equitativa. En el curso de los últimos cinco años no ha ocurrido ningún conflicto grave en el Territorio; en el curso del año pasado no se ha acusado ni se ha reconocido culpable a ningún empleado ni trabajador de infracción contra las leyes y reglamentos del trabajo vigentes.

Inmigración

Toda persona que no es nacional del Territorio o no reside en él legalmente no puede entrar ni permanecer en dicho Territorio en calidad de residente permanente sino con autorización del Alto Comisionado. Los permisos que se otorgan a los visitantes pueden cancelarse en cualquier momento, por razones de seguridad o por motivos que quedan al criterio del Alto Comisionado. Durante el año que se estudia en este documento no entró ningún inmigrante por primera vez en el Territorio.

En su 12º período de sesiones, la Autoridad Administradora informó al Consejo que estaba estudiando un plan encaminado a autorizar la entrada en el Territorio de 87 habitantes del Territorio en fideicomiso de Nauru, a condición de que gozaran de buena salud, tuvieran recursos suficientes y que hubieran obtenido la aceptación de sus parientes residentes en las Islas Marshall y las Carolinas.

Las dos Misiones que visitaron el Territorio en 1950 y en 1953 recibieron peticiones de nacionales japoneses emparentados con habitantes del Territorio, y la Misión de 1953 se informó de que cada vez que un japonés presentaba una petición de reingreso al Territorio, el Departamento de Marina había tomado siempre una decisión negativa por motivos de seguridad. La Misión ha tomado nota de que el Consejo de Administración Fiduciaria, en su octavo período de sesiones, había pedido informes y expresado la confianza de que la Autoridad Administradora proporcionaría al Consejo explicaciones detalladas sobre este punto.

En su informe anual, la Autoridad Administradora declaraba que estimaba que el regreso en conjunto de los antiguos residentes japoneses o de otras nacionalidades, no era deseable por razones sociales y económicas. Sin embargo, a reserva de las exigencias de seguridad, el Gobierno del Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico estaría dispuesto a autorizar el regreso a las Islas de los cónyuges japoneses y de los hijos nacidos de uniones mixtas, cuando los miembros de la familia interesada consintieran en ello y cuando una encuesta especial determinara en cada caso que la colectividad micronesia aceptaba su regreso y que ello no crearía ningún problema grave social o económico.

Servicios médicos y sanitarios

El Departamento de Salud Pública es administrado y dirigido por un Director cuya oficina permanente está situada en la sede de la Administración del Territorio en fideicomiso, en Hawaii. El resto del personal sanitario trabaja en el terreno. En cada centro de distrito, un director local ayudado por personal norte-

americano compuesto de dos a cuatro personas, se ocupa de los servicios médicos tanto en el plano administrativo como en el clínico. Los otros empleados del centro de distrito y de todas las islas y aldeas que dependen de él son micronesios. Algunos consultores, instructores e inspectores técnicos norteamericanos recorren los distritos.

Los seis hospitales generales del Territorio, ubicados en cada centro de distrito, cuentan en total con 396 camas. En cada hospital hay un dispensario y en las islas y aldeas lejanas hay unos 115 dispensarios que tienen de una a 10 camas. Además, en la Isla de Tinian hay una leprosería con 100 camas y alojamientos para 120 enfermos ambulantés. En su 14º período de sesiones la Autoridad Administradora informó al Consejo que se preparaban planes en los que se preveía la creación de dos pequeños establecimientos de aislamiento para los leprosos, uno en Yap y el otro en Ponape.

Los gastos por concepto de salud pública durante el ejercicio económico de 1953 alcanzaron la suma de 715.951 dólares, en comparación con 641.329 dólares en 1952; esta cifra es la más elevada que se haya registrado hasta la fecha. La Autoridad Administradora indica que se han agrandado, transformado y reparado los hospitales, los dispensarios y los centros de enseñanza técnica mediante la ayuda de créditos asignados a un presupuesto distinto del presupuesto de salud pública; los créditos asignados a la salud pública se han dedicado casi totalmente al funcionamiento de los servicios médicos. Las sumas percibidas para los servicios médicos y odontológicos representan, más o menos, un 2,5% del total de los gastos relativos a los servicios médicos. Con excepción de la asistencia técnica que la Comisión del Pacífico Meridional proporcionó durante encuestas de corta duración, el Territorio no ha recibido ninguna ayuda financiera del exterior para su programa de salud pública.

Durante el año que se examina en este documento, el personal médico no autóctono se componía de 33 personas, de las cuales 11 eran médicos y cuatro odontólogos. El número de personal autóctono, entre prácticos en medicina y odontología y enfermeras diplomadas ascendía a 26.

En su 12º período de sesiones, el Consejo recordó que ya había expresado su satisfacción por los esfuerzos desplegados por la Autoridad Administradora para mejorar la salud de la población autóctona; hizo suyas las felicitaciones formuladas por la Misión Visitadora con respecto a este punto y se dió por enterado con satisfacción de que se habían hecho nuevos y acertados esfuerzos para formar un personal médico y sanitario autóctono y confiarle funciones cada vez más importantes. Además el Consejo compartió la opinión de la Misión Visitadora de que convenía mejorar los servicios médicos a los habitantes de las islas lejanas y formuló la confianza de que la Autoridad Administradora lograría todo esto mediante su programa actual de desarrollo y mejoramiento de los medios de transporte en el interior de los distritos.

La Autoridad Administradora declaró que su política sanitaria se encaminaba primordialmente a formar el mayor número posible de micronesios para los servicios técnicos sanitarios, y dentro del menor plazo posible. Existen dos niveles de instrucción; el primero permite licenciarse como práctico médico u odontólogo; el segundo entrar a los servicios auxiliares en calidad de enfermera, técnico, farmacéutico, trabajador o

auxiliar sanitario. En la Escuela Central de Medicina de Suva hay 30 futuros prácticos de servicios médicos y de odontología matriculados para un ciclo de estudios de cuatro años; cuatro prácticos que han terminado sus estudios reciben formación superior en el extranjero. Durante el año que se estudia en este documento, las autoridades han abierto en el Territorio una escuela para la formación de personal auxiliar. Dado el número limitado de personal calificado no autóctono y la gran extensión de la zona marítima que hay que atender, la Autoridad Administradora señala que el Territorio necesita urgentemente más personal micronesio que esté mejor preparado. La diversidad de idiomas, los problemas de transporte y la instrucción básica rudimentaria de los micronesios dificultan la formación técnica y plantean numerosas dificultades; la Autoridad Administradora estima que éste es uno de los problemas más importantes que debe resolver el Departamento de Salud Pública.

En su 14º período de sesiones, el Consejo adoptó las recomendaciones siguientes:

La Comisión toma nota de las observaciones favorables formuladas por la Organización Mundial de la Salud en lo relativo a los servicios unificados de medicina curativa y preventiva que la Autoridad Administradora ha puesto a la disposición de madres y niños. El Consejo toma nota igualmente de que la Autoridad Administradora ha tomado nuevas medidas para mejorar los servicios médicos y sanitarios, principalmente acelerando la formación del personal médico autóctono, aumentando el número de los establecimientos y servicios médicos y fijando un plan para crear nuevas leproserías. El Consejo expresa la esperanza de que la Autoridad Administradora continuará sus esfuerzos encaminados a mejorar la situación sanitaria y, en especial, que tomará nuevas disposiciones para eliminar la tuberculosis.

El Consejo, después de tomar nota de la declaración de la Autoridad Administradora con respecto a los planes que ha formulado para dar un nuevo impulso a los establecimientos y servicios médicos, invita a la Autoridad Administradora a que en su próximo informe dé cuenta de los progresos realizados en esta materia.

Observaciones de los miembros del Consejo hechas a título personal únicamente,

Consideraciones generales

El representante de Haití declaró que los planes de desarrollo emprendidos por la Autoridad Administradora no deberían por ahora tender al desarrollo del intercambio comercial, sino más bien a mejorar el bienestar físico de la población que parece seriamente amenazado por determinadas enfermedades.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas subrayó el hecho de que las instituciones autóctonas eran objeto de una discriminación racial, pues los maestros norteamericanos recibían sueldos infinitamente superiores a los de ellos. Como lo había hecho resaltar la Misión Visitadora en su informe, en el Territorio se practicaba la segregación. En consecuencia, en estas Islas se observaban las prácticas indignantes de discriminación y de segregación racial existentes también en otros territorios.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró en forma categórica que en el Territorio en fideicomiso no se practicaba ninguna forma de segregación o de discriminación racial.

Mano de obra

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que los pocos indígenas que trabajan como asalariados recibían sueldos absolutamente insuficientes que no les aseguraban una existencia digna. Según los datos del informe anual, el jornal diario de los obreros del Territorio era de 0,75 centavos de dólar.

El representante especial de la Autoridad Administradora declaró que existía necesariamente una diferencia considerable entre la escala de salarios del personal micronesio y el del personal norteamericano. La escala de salario de los micronesios se fija según el ingreso normal de los indígenas que trabajan en industrias locales: producción de copra, empresas locales de transporte, etc. Estos sueldos se calculan de manera que no rompan el equilibrio de la economía local. Por lo demás, la economía de subsistencia que domina en el Territorio en fideicomiso y el régimen familiar en el sentido amplio de esta expresión, significan que los empleados micronesios no viven de sus salarios, lo cual por lo tanto no puede servir para determinar su nivel de vida. Los sueldos que se pagan a los norteamericanos corresponden a una suma que se cree necesaria para incitar a un personal calificado a renunciar a las ventajas de la vida en los Estados Unidos y a aceptar un empleo en una región lejana. Este personal es necesario para facilitar el progreso de los micronesios y conviene ofrecerle un sueldo suficiente para asegurarse sus servicios y poder guardarlos bastante tiempo.

Servicios médicos y sanitarios

El representante de India tomó nota con satisfacción de que existían en esta región muchas instituciones sanitarias. Señaló que la Organización Mundial de la Salud había formulado comentarios favorables sobre la creación de servicios unificados de medicina curativa y preventiva para la protección de madres y niños, así como sobre el trabajo que realizaban los médicos y odontólogos. Comprobó también con agrado que en 1953 se había creado una escuela para preparar personal auxiliar. Recalcó sin embargo que las sumas destinadas a servicios sanitarios, que habían aumentado en 1953 con respecto a 1952, disminuyeron en el año 1954.

El representante de Francia declaró que los progresos sanitarios realizados eran impresionantes, y que la formación rápida de un cuerpo médico autóctono era el mayor éxito de la Autoridad Administradora. La idea de crear, además de la leprosería existente, otras dos leproserías en Yap y en Ponape, le parecía excelente tanto desde el punto de vista psicológico como moral.

El representante de Haití expresó la opinión de que la Administración parecía más bien dedicarse al tratamiento de las enfermedades, que a prevenirlas. Con respecto a la tuberculosis, pregunta si el hecho de que esta enfermedad tiende a desarrollarse, no se debe a deficiencias proteínicas en el régimen alimenticio. Pidió que la Autoridad Administradora dedicase a este problema una atención especial.

El representante de El Salvador declaró que las condiciones sanitarias dejaban mucho que desear; expresó su confianza en que la Autoridad Administradora continuaría sus esfuerzos para mejorar la situación.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señaló que la Autoridad Administradora reducía los créditos destinados a la salud pública en lugar de aumentarlos. En 1954, las sumas presupuestadas para salud pública eran inferiores en más de 100.000 dólares a las del año anterior. Los créditos asignados en 1953 se elevaban aproximadamente a 716.000 dólares, mientras que los créditos previstos para 1954 no eran más que de unos 610.000 dólares. Importa que el Consejo recomiende a la Autoridad Administradora mejorar los servicios médicos y sanitarios destinados a la población indígena, aumentar el número de hospitales y de personal médico, y prever, para este fin, la asignación de créditos mayores. Con respecto a este punto, y si se quieren realizar progresos reales en materia de salud pública, hay que obligar a la Autoridad Administradora a destinar al Territorio en fideicomiso créditos con cargo al presupuesto federal de los Estados Unidos.

El representante especial de la Autoridad Administradora agradeció a los miembros del Consejo las observaciones hechas sobre la importancia de los servicios médicos en el Territorio. Señaló que en diciembre de 1954 se agregarían al personal médico 25 nuevos médicos y dentistas que habían recibido su formación médica y odontológica en Suva. El personal médico micronesio completaba constantemente su formación en los hospitales locales, en Honolulu y otras partes, y los resultados obtenidos eran satisfactorios. La tuberculosis era quizás el problema más grave que se planteaba en materia de salud pública; para poder hospitalizar a todos los enfermos se necesitaría tener mayor número de instalaciones. Actualmente la Administración trata de utilizar las casas de reposo locales para los convalecientes, y espera que esta medida contribuirá a resolver el problema. El representante especial declaró que estaba seguro de que la cuestión del régimen alimenticio recibía también toda la atención necesaria. El régimen alimenticio era bueno en los hospitales. Las escuelas así como los agentes de los servicios de divulgación agrícola daban a los indígenas consejos en materia de alimentación. En lo relativo a los gastos de los programas sanitarios, el representante especial recalco que si bien en 1953 estos gastos habían sido superiores a los previstos para 1954, esto se debía principalmente a las compras importantes de productos farmacéuticos y médicos realizadas en 1953.

V. PROGRESO DE LA ENSEÑANZA

Reseña de la situación del Territorio y recomendaciones adoptadas por el Consejo

Consideraciones generales

El Código del Territorio en fideicomiso prevé un sistema de escuelas públicas gratuitas, la creación de un servicio central de enseñanza para el Territorio y servicios locales en cada comunidad. Cada comunidad, salvo en los casos en que el Alto Comisionado decida de otro modo, deberá proveer al mantenimiento de las escuelas públicas elementales con cargo a los ingresos de la localidad, y asegurar la asistencia escolar obligatoria de todos los niños entre 8 y 14 años. El Código indica igualmente las condiciones necesarias para la creación y funcionamiento de las escuelas particulares.

En el curso del año que se estudia en este documento, el número de las escuelas públicas elementales su-

bió de 139 a 144, y el número de alumnos de 5.767 a 6.363. Durante este mismo período, el número de alumnos aumentó de 789 a 802 en las seis escuelas primarias superiores (intermediate schools) y de 101 a 125 en la Escuela Central de las Islas del Pacífico. Los gastos imputados al presupuesto de enseñanza ascendieron a 435.440 dólares, en comparación con 430.930 el año anterior.

Entre los estudiantes matriculados en establecimientos de enseñanza superior fuera del Territorio, hay 64 estudiantes en Guam, 49 en la Escuela Central de Medicina y de Odontología de las Islas Viti, 18 en Hawái, 13 en Manila, 12 en los Estados Unidos de América y un titular de una beca de las Naciones Unidas concedida para estudios en Nueva Zelanda, Samoa e Islas Viti.

La Autoridad Administradora declara que los principales fines docentes que se persiguen son los siguientes:

i) Permitir en cuanto se pueda la asistencia de todos los niños a los seis años de cursos elementales.

ii) Ofrecer a determinados alumnos, escogidos por sus aptitudes dirigentes, la oportunidad de hacer estudios secundarios a fin de capacitarlos y convertirlos en ciudadanos más útiles que fomenten el progreso de su comunidad.

iii) Ofrecer a los micronesios, que deben ocuparse de la enseñanza, toda la ayuda y aliciente que pueda darles la Autoridad Administradora, para que puedan desempeñar íntegramente esta labor.

Según el informe anual, los planes docentes a corto plazo constituyen una tentativa enérgica para reorganizar el programa y el ciclo de estudios. Prueba de ello son los esfuerzos que se hacen para emplear la lengua vernácula en las escuelas elementales y para preparar los textos escolares en este idioma. Los servicios pertinentes se han dedicado a preparar programas que correspondan a la cultura local y nuevos textos escolares que se adapten mejor al medio micronesio. En otros aspectos, los servicios de enseñanza procuran ayudar a la administración escolar del distrito a independizarse de la Autoridad Administradora. Se insiste cada vez más en que los municipios y el personal administrativo autóctono sean los que dirijan la enseñanza y asuman su total responsabilidad. En las escuelas primarias superiores (intermediate schools), se trata de disminuir progresivamente la influencia de la cultura occidental que no se adapta bien a las condiciones locales, y crear valores que correspondan mejor a los valores autóctonos. Se insiste sobre todo en el desarrollo del programa de formación agrícola y profesional. La Autoridad Administradora considera que muchas mejoras y realizaciones actuales deberían permitir tratar en forma más coherente el programa de enseñanza cuando se trata de fijar los programas de desarrollo a largo plazo. La Autoridad Administradora declara que trata de hacer menos brusca la transición de la dependencia a la independencia y, mediante la obra del servicio de enseñanza, encomendar a las poblaciones locales de los distritos y de las comunidades la dirección del mayor número de actividades posibles.

Las escuelas de misión deben ser aprobadas por la Autoridad Administradora. Para ello, deben ofrecer un mínimo de enseñanza y conseguir los resultados fijados por el servicio de enseñanza. Actualmente hay 18 escuelas de enseñanza primaria y ocho de enseñanza

secundaria, que cuentan con 1.283 y 369 alumnos, respectivamente. No están subvencionadas ni por la Autoridad Administradora ni por la administración local.

En su 12º período de sesiones, el Consejo comprobó con interés y satisfacción que la Autoridad Administradora había reorganizado el programa de enseñanza del Territorio a fin de ampliarlo y adaptarlo mejor, en general, a las necesidades de los habitantes. Se unió a la Misión Visitadora y a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para expresar su aprobación acerca del espíritu práctico con que se interpretaba el problema de enseñanza en el Territorio.

En su informe anual de 1953, la Autoridad Administradora declaró que en el Territorio se daba primordial importancia a la enseñanza y se trataba de formar micronesios, desarrollar su instrucción y ayudarlos a alcanzar su autonomía poniéndolos en condiciones de afrontar los problemas del mundo moderno tan eficazmente como su organización social tradicional se lo permitía en otro tiempo. La Autoridad Administradora trataba de crear instituciones democráticas que pudieran basarse en una economía sana capaz de asegurar el nivel de vida que se deseaba y que se podía obtener, y que también pudiera, a su vez, reforzar las instituciones democráticas.

En su 14º período de sesiones, el Consejo adoptó las recomendaciones siguientes:

El Consejo toma nota con satisfacción de los progresos docentes realizados y de las observaciones favorables formuladas por el representante de la UNESCO con respecto a este punto. Considerando empero que es necesario continuar mejorando los servicios de enseñanza y principalmente los de enseñanza primaria, recomienda a la Autoridad Administradora que proporcione a los municipios, cada vez que sea necesario, subvenciones para construir o mejorar los servicios escolares.

El Consejo comparte el deseo de la Autoridad Administradora de que el personal norteamericano de la Administración sea reemplazado progresivamente por personal autóctono, a medida que se disponga de candidatos calificados. Considera que la enseñanza superior y la formación profesional y técnica son importantes para el desarrollo del Territorio y de sus habitantes. El Consejo estima que convendría dedicarse a aumentar el número de escuelas de formación profesional técnica en el interior del Territorio y ampliar al máximo el programa de envío al extranjero de estudiantes que deseen proseguir estudios universitarios. Con respecto a este punto, el Consejo toma nota con satisfacción de que actualmente 100 estudiantes cursan estudios universitarios en países de ultramar y que muchos de ellos han recibido becas del Gobierno.

Personal docente

En el Departamento de Educación hay 43 puestos ocupados por personal no autóctono y 84 puestos ocupados por indígenas. El total de maestros autóctonos de las escuelas públicas es de 275 en las escuelas elementales y 41 en las escuelas intermedias.

Debido a la falta de personal docente calificado no se han fijado todavía normas mínimas a los autóctonos para ocupar el puesto de maestro. Sin embargo, se espera que pronto se podrán exigir estos requisitos, pues se prepara a nuevos maestros y el personal actual com-

pleta su formación. Lo ideal sería que los maestros se graduaran en la Escuela Central de las Islas del Pacífico, situada en Truk, y que siguieran cuando menos un curso de pedagogía durante ocho semanas en el verano. Actualmente, un poco más de la cuarta parte de los maestros de las escuelas elementales del Territorio se han diplomado en esa Escuela. La Autoridad Administradora informa que se ha graduado en dicha Escuela suficiente número de estudiantes como para permitir la aplicación de las normas mínimas previstas, pero muchos de ellos no entran en la enseñanza porque los sueldos son menos elevados que en otras profesiones o en otras ramas de la administración. Aunque en la mayor parte de los distritos se dispone del número de maestros necesario, su nivel profesional deja mucho que desear. En cada distrito se dan cursillos de ocho semanas durante las vacaciones del verano, en los cuales se estudian los métodos pedagógicos.

El Consejo, en su 12º período de sesiones, tomó nota de que la necesidad de aumentar el número y la calidad de los maestros autóctonos constituía el problema más urgente en el ramo de la enseñanza, y acogió con satisfacción el plan que se ha propuesto la Autoridad Administradora de dar a los maestros mayores posibilidades de perfeccionarse dentro del empleo además de los cursos de verano que se organizan regularmente.

En su informe anual para 1953, la Autoridad Administradora declaró que, teniendo en cuenta que la formación de maestros había sido siempre un factor básico en todo sistema de enseñanza, el Territorio daba impulso a su programa de formación profesional en la materia a fin de hacer frente a las necesidades de la comunidad. En cada distrito se celebraba un curso de verano que duraba ocho semanas. En el resto del año, el inspector de la enseñanza normal de cada distrito visitaba las escuelas elementales y ayudaba a los maestros a resolver sus dificultades, y a preparar un material que permitiera enriquecer el programa de enseñanza.

En su 14º período de sesiones, el Consejo adoptó la siguiente recomendación:

El Consejo, tomando nota con preocupación de que muchos graduados de la Escuela Central de las Islas del Pacífico no ingresaban en el magisterio debido a que los sueldos eran menos elevados que en otras profesiones, estimaba que la Autoridad Administradora debería prestar la mayor atención al problema de ofrecer condiciones ventajosas a los maestros. El Consejo recomienda que la Autoridad Administradora revise el régimen de sueldos de los maestros autóctonos y considere la posibilidad de proporcionar subsidios o ayuda de otro género a los municipios a fin de permitirles que contraten un personal docente calificado.

Observaciones de los miembros del Consejo hechas a título personal únicamente

Consideraciones generales

El representante de la India señaló que los gastos ocasionados por la enseñanza habían disminuido en 1953 y 1954, y expresó la esperanza de que esta disminución en cantidad hubiera sido compensada por un mejoramiento de la calidad de la enseñanza en esa región.

Dicho representante señaló que se enviaba a muchos estudiantes a los territorios vecinos para seguir cursos

de enseñanza superior; teniendo en cuenta el hecho de que el Territorio tendrá que hacerse cargo un día de sus propios servicios sociales y administrativos, se preguntó si se podría recibir esa enseñanza en el futuro dentro del Territorio en fideicomiso.

El representante de Francia observó que se habían realizado serios esfuerzos muy metódicamente a fin de desarrollar la educación pública. La cifra de 100 estudiantes que seguían cursos fuera del Territorio era impresionante. En conjunto, los maestros autóctonos de los diferentes grados de competencia producían buena impresión. Elogió a los maestros estadounidenses por su capacidad y por su consagración a la población indígena. Sin embargo, estimó que se debía estudiar detenidamente la cuestión de los sueldos de los maestros, y que la Administración debería prestar ayuda a las comunidades en la construcción o mejoramiento de los edificios escolares concediéndoles al efecto pequeños subsidios. Asimismo estimó que en un futuro próximo el sistema de enseñanza debería tender a preparar cierto número de indígenas para ganarse la vida en el extranjero.

El representante de Bélgica declaró que el Consejo debía felicitar a la Autoridad Administradora por haber enviado 100 estudiantes al extranjero para seguir cursos superiores, y asimismo por su política de impartir la enseñanza elemental en lengua vernácula.

El representante de Bélgica estimó que la enseñanza técnica y profesional era tan importante como la instrucción general que se impartía en las escuelas primarias y secundarias, y que quizá era algo prematuro adoptar una ley por la que se estableciera la enseñanza obligatoria como en los países occidentales. Sin duda sería preferible seguir la política adoptada hasta ese momento, o sea el desarrollo progresivo de la educación y la introducción subsiguiente de la enseñanza obligatoria.

El representante de ese país se preguntó por qué no se había prescrito la inspección escolar.

El representante del Reino Unido expresó la opinión de que no era útil para los habitantes del Territorio proporcionarles una instrucción demasiado rápida y tan distinta que podría tener como consecuencia divorciarlos de su medio ambiente y crear en ellos una impaciencia con su secuela de dudas. El mejor sistema sería combinar en la enseñanza lo nuevo con lo viejo.

El representante de El Salvador hizo suya la declaración elogiosa de la UNESCO relativa a la enseñanza, particularmente en lo que se refería a la introducción de la enseñanza elemental, y se interesó al saber que ciertos estudiantes recibían becas y cursaban estudios superiores fuera del Territorio. Expuso el parecer de que sería posible utilizar la radiodifusión como método de enseñanza para los adultos, y que convenía solicitar de la Autoridad Administradora que no escatimara esfuerzo alguno a fin de desarrollar la instrucción de la población, pues la instrucción constituiría sin duda alguna una base sólida para el desarrollo económico y político del Territorio.

El representante de Siria declaró que aunque reconocía que la Autoridad Administradora había obtenido grandes resultados en el campo de la enseñanza, sin embargo estimaba que sus esfuerzos no correspondían todavía a la magnitud del problema. Los factores geográficos, demográficos y económicos así como los objetivos del Régimen de Administración Fiduciaria suscita-

ban dificultades cuando se trataba de definir claramente y con precisión una política de enseñanza, pero no se debía permitir que estos factores constituyeran obstáculos para formar un sistema de enseñanza bien organizado. Sin descuidar la ayuda que se debía proporcionar a los habitantes para desarrollar su propia cultura, la Autoridad Administradora debía esforzarse por prepararlos a asumir la responsabilidad de su destino y a afrontar la intensa vida de un mundo complejo. El orador señaló que la enseñanza parecía sufrir de ciertas limitaciones financieras y expresó la esperanza de que pudieran ser superadas. Estimó, en lo que se refería a la enseñanza primaria, que no se debía contar exclusivamente con los escasos recursos de la población. Incumbía a la Autoridad Administradora la principal responsabilidad por la enseñanza y no debían faltar los fondos que le permitieran desempeñar íntegramente su cometido.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señaló que los créditos destinados a la enseñanza habían disminuido cada año desde 1952. En 1952 se elevaban en cifras redondas a 438.000 dólares; en 1953, a 399.000 dólares; la cifra prevista para 1954 había sido reducida todavía más. La Autoridad Administradora no cumplía con la obligación que le incumbía de favorecer el progreso en el campo de la enseñanza. Hacía soportar ahora a la población autóctona las cargas materiales y financieras que entrañaban la construcción y la conservación de las escuelas, cuando la población no estaba en condiciones de desarrollar la enseñanza con los fondos de que disponía. En el mismo informe anual se declaraba que correspondía a la población autóctona el construir y equipar las escuelas, y que los habitantes fabricaban pupitres y bancos con sus herramientas primitivas. Los Estados Unidos de América, el país más rico del mundo, no asignaba fondos para equipar adecuadamente a este Territorio en fideicomiso aunque se tiraban centenares de millones de dólares para efectuar pruebas de bombas de hidrógeno en ese Territorio. La Autoridad Administradora, en oposición a la Carta de las Naciones Unidas y al Acuerdo de Administración Fiduciaria, no tenía la intención de respetar su obligación de favorecer el progreso en el ramo de la enseñanza entre la población indígena.

Esta actitud de la Autoridad Administradora había dado por resultado que en ciertas zonas fuera menor el número de estudiantes en 1953 que en 1947 y 1948. En Ponape había disminuido el número de estudiantes desde 1946, en Truk la cifra había pasado de 3.000 a 2.000 aproximadamente. La gran mayoría de los estudiantes recibía sólo instrucción primaria. La Autoridad Administradora no desarrolla la enseñanza secundaria y no concedía un número suficiente de becas que permitiera a los estudiantes instruirse fuera del Territorio. No había ningún autóctono en el Territorio que hubiera terminado los estudios superiores. El estado insatisfactorio de la enseñanza se confirmaba por el hecho de que gran parte de la población continuaba siendo analfabeta. Por ejemplo, en Truk, el 25% de los habitantes eran analfabetos, en Ponape, un tercio, en Palaos, la mitad.

El Consejo de Administración Fiduciaria debería señalar a la atención de la Autoridad Administradora la necesidad de aumentar las asignaciones presupuestarias destinadas a la enseñanza y otros fines culturales. Se debía ampliar el sistema escolar, aumentar el número de maestros y mejorar la calidad de la enseñanza. Los alumnos deberían tener la posibilidad de recibir ense-

ñanza secundaria, universitaria y profesional. Se deberían tomar otras medidas para suprimir el analfabetismo generalizado entre la población indígena, tanto en lo que respecta a los niños como a los adultos. Asimismo habría que tomar disposiciones para formar cuadros autóctonos. La Autoridad Administradora debería asignar al Territorio fondos procedentes del presupuesto federal de los Estados Unidos.

En respuesta a los temores expresados por diversos miembros del Consejo con respecto a la política de confiar la enseñanza en manos de la población, el representante especial de la Autoridad Administradora declaró que esta política se explicaba por dos razones. En primer lugar, la Autoridad Administradora estaba convencida de que era un rasgo universal en la naturaleza humana apreciar mucho más lo que le costaba tiempo y dinero que lo que se le daba por imposición o sin exigir esfuerzo de su parte. Como quiera que la tradición en los Estados Unidos era asignar gran importancia a la enseñanza, la Autoridad Administradora estimaba que la mejor manera de infundir ese respeto por la educación entre todos los micronesios y alentarlos a actuar consistía en crear mayor interés común por la escuela local y hacerles sentir que la escuela les pertenecía. En segundo lugar, la Autoridad Administradora estaba convencida de que se reforzaba el sentido moral de un pueblo y se favorecía su evolución cuando se le daba la posibilidad de ocuparse de los servicios de cuya necesidad se daba plena cuenta.

Sin embargo, el Consejo no debía llegar a la conclusión de que la Autoridad Administradora no asumía ninguna responsabilidad en lo que respecta a la enseñanza elemental. Al contrario, en cada distrito había inspectores escolares cuyos sueldos estaban a cargo de los fondos del Territorio en fideicomiso procedentes en gran parte de subvenciones federales; estos inspectores realizaban frecuentes viajes para mantenerse en contacto con las escuelas y sus actividades. Los educadores colaboraban estrechamente con las autoridades municipales, prestando su útil concurso a las escuelas y a los maestros. Durante el año precedente la Autoridad Administradora suministró ayuda a tres distritos con objeto de elaborar un régimen fiscal que permitiera aumentar el sueldo de los maestros y poner a su disposición el material docente necesario.

La Autoridad Administradora impartía gratuitamente la enseñanza intermedia y la enseñanza de la Escuela Central de las Islas del Pacífico.

Con respecto a las observaciones sobre los gastos de la enseñanza, el representante especial declaró que esta disminución aparente se debía a una incomprensión; en efecto, las cifras citadas no eran comparables. Cuando se examinaban cifras comparables se echaba de ver que en vez de disminuir había habido un aumento en los gastos de enseñanza en el curso de este período de tres años.

En respuesta a la declaración del representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, según el cual la matrícula de alumnos había disminuido desde 1946, el representante especial dijo que en el curso de los primeros años la matrícula había sido exageradamente elevada debido a que se habían inscrito muchos estudiantes que habían pasado de la edad normal; lo cual ocurría como consecuencia de que durante los años de la guerra la enseñanza había quedado paralizada. El número de inscripciones normales aumentaba cada año en proporción al aumento de la población infantil.

Con respecto a las observaciones relativas a la enseñanza secundaria, el representante especial declaró que se adoptarían disposiciones para aumentar el número de estudiantes y que se mejoraría la calidad de la enseñanza, en ese grado como en todos los demás, a fin de responder a las necesidades reales y a los deseos de la población.

En contestación a una pregunta del representante de la India sobre si se pensaba crear establecimientos de enseñanza superior en el Territorio, el representante especial declaró que, a decir verdad, no podía prever para qué fecha sería posible crear un establecimiento de enseñanza universitaria. Sin embargo eso no significaba que esa región no había de tener medios de instrucción superior, puesto que el Territorial College establecido por el Gobierno en Guam daría con el tiempo cursos universitarios completos: la ubicación de este establecimiento era tan favorable para las diversas partes del Territorio en fideicomiso como lo sería si estuviera situado en uno de los distritos. Los micronesios sólo empezaron a aprender el inglés recientemente, al terminar la dominación japonesa. La Autoridad Administradora ocupaba el Territorio desde hacía ocho años solamente y no había habido tiempo de preparar una parte importante de la población para la enseñanza superior y ni siquiera de que los estudiantes terminaran el ciclo de estudios universitarios. Sin embargo, varios micronesios poseían ya formación universitaria y profesional.

Personal docente

El representante de Bélgica señaló que muchos graduados de la Escuela Central rehusaban ingresar en el cuerpo docente porque se les ofrecían mejores oportunidades en otros campos de la vida económica, por lo que se justificaba que la Administración interviniera en forma de subvenciones a fin de permitir que las comunidades insulares ofrecieran a los maestros sueldos adecuados.

El representante de China apoyó las declaraciones de los representantes de Francia y de Bélgica relativas a los sueldos de los maestros. Al respecto dijo que le parecía un grave problema el hecho de que casi las tres cuartas partes de los estudiantes preparados en la Escuela Central de las Islas del Pacífico no tuvieran la intención de formar parte del personal docente, e invitó a la Autoridad Administradora a que tomara medidas a fin de hacer más atractiva la profesión docente y emplear a los estudiantes en las escuelas que necesitaran sus servicios.

El representante del Reino Unido hizo suyas las sugerencias formuladas por otras delegaciones acerca de la necesidad de mejorar la situación del magisterio.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que se debía prestar atención a la situación particularmente difícil de los maestros autóctonos que recibían un miserable sueldo de 8 a 15 dólares mensuales. Se practicaba la discriminación racial si se tenía en cuenta que los maestros estadounidenses recibían un sueldo de 4.000 a 5.000 dólares anuales.

El representante especial de la Autoridad Administradora manifestó que en enero de 1954 la Administración había hecho un préstamo de 4.000 dólares al distrito de Truk para pagar el sueldo de los maestros de las escuelas elementales. Se había establecido un nuevo impuesto en ese distrito así como en el distrito de Ponape y en las Islas Marshall, en consulta con los

organismos y autoridades locales competentes, a fin de garantizar el pago del sueldo de los maestros.

DOCUMENTO S/3416

Informe del Consejo de Administración Fiduciaria al Consejo de Seguridad relativo al Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico correspondiente al período comprendido entre el 17 de julio de 1954 y el 22 de julio de 1955

INDICE

	<i>Página</i>
Introducción	116
<i>Parte I. Actividades del Consejo de Administración Fiduciaria concernientes al Territorio en fideicomiso</i>	
Examen del informe anual	116
Peticiones	117
Misión Visitadora	117
<i>Parte II. Situación existente en el Territorio en fideicomiso</i>	
I. Consideraciones generales	
Reseña de la situación en el Territorio y recomendaciones adoptadas por el Consejo	117
Observaciones de los miembros del Consejo hechas a título personal únicamente	118
II. Progreso político	
Reseña de la situación en el Territorio y recomendaciones adoptadas por el Consejo	118
Observaciones de los miembros del Consejo hechas a título personal únicamente	119
III. Progreso económico	
Reseña de la situación en el Territorio y recomendaciones adoptadas por el Consejo	121
Observaciones de los miembros del Consejo hechas a título personal únicamente	125
IV. Progreso social	
Reseña de la situación en el Territorio y recomendaciones adoptadas por el Consejo	127
Observaciones de los miembros del Consejo hechas a título personal únicamente	127
V. Progreso educativo	
Reseña de la situación en el Territorio y recomendaciones adoptadas por el Consejo	128
Observaciones de los miembros del Consejo hechas a título personal únicamente	129

INTRODUCCIÓN

El Consejo de Administración Fiduciaria, de conformidad con el Artículo 83 de la Carta, con la resolución del Consejo de Seguridad aprobada en su 415a. sesión el 7 de marzo de 1949, y con la resolución 46 (IV) del Consejo de Administración Fiduciaria aprobada el 24 de marzo de 1949, ejerce, en nombre del Consejo de Seguridad, las funciones que corresponden a las Naciones Unidas en virtud del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria, en lo relativo al progreso político, económico, social y educativo de los habitantes del Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, reconocido como zona estratégica.

Parte I

ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA CONCERNIENTES AL TERRITORIO EN FIDEICOMISO

Examen del informe anual

El informe del Gobierno de los Estados Unidos relativo a la administración del Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico correspondiente al período com-